

ESTALLIDO EN LOS ANDES

MOVILIZACIÓN POPULAR
Y CRISIS POLÍTICA EN PERÚ

Anahí Durand Guevara

Estallido en los Andes

Movilización popular
y crisis política en Perú

Estallido en los Andes

Movilización popular
y crisis política en Perú

Anahí Durand Guevara



CLACSO

Consejo Latinoamericano
de Ciencias Sociales

Conselho Latino-americano
de Ciências Sociais

CLACSO Secretaría Ejecutiva

Karina Batthyány - Directora Ejecutiva

María Fernanda Pampín - Directora de Publicaciones

Equipo Editorial

Lucas Sablich - Coordinador Editorial

Solange Victory y Marcela Alemandi - Producción Editorial

Julián Rebón y Bernardo Mançano Fernandes - Coordinación de la colección

Durand Guevara, Anahí

Estallido en los Andes. Movilización popular y crisis política en Perú / Anahí Durand Guevara. -

1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires: CLACSO, 2023.

Libro digital, PDF - (En movimiento)

Archivo Digital: descarga

ISBN 978-987-813-608-0

1. Análisis de Políticas. 2. Afiliación Política. I. Título.

CDD 306.2098

Corrección: Juan Federico von Zeschau

Diseño de cubierta: Ezequiel Cafaro

Diseño y diagramación: María Clara Diez



CC BY-NC-ND 4.0

© Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales | Queda hecho el depósito que establece la Ley 11723.

El contenido de este libro expresa la posición de los autores y autoras y no necesariamente la de los centros e instituciones que componen la red internacional de CLACSO, su Comité Directivo o su Secretaría Ejecutiva.

CLACSO

Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales - Conselho Latino-americano de Ciências Sociais

Estados Unidos 1168 | C1023AAB Ciudad de Buenos Aires | Argentina

Tel [54 11] 4304 9145 | Fax [54 11] 4305 0875 | <clacso@clacsoinst.edu.ar> | <www.clacso.org>



Este material/producción ha sido financiado por la Agencia Sueca de Cooperación Internacional para el Desarrollo, Asdi. La responsabilidad del contenido recae enteramente sobre el creador. Asdi no comparte necesariamente las opiniones e interpretaciones expresadas.

Índice

Presentación En Movimiento	7
Introducción.....	9
Herencia colonial, neoliberalismo y conflicto	15
La disputa política. De la conflictividad social al antagonismo	33
<i>“No es el 7 de diciembre, son 200 años”.</i> Rostros y reclamos del estallido	63
De la comunidad a Lima. Organización y solidaridad en la protesta.....	99
Reflexiones finales. Tiempos de Pachacuti....	133
Bibliografía.....	137
Siglas	141
Sobre la autora.....	143

Presentación

En Movimiento

La potencia de las luchas sociales se destaca en los trazos de la historia reciente y en la geografía de nuestra América. Diferentes movimientos y, en ocasiones, verdaderas rebeliones ciudadanas han empujado cambios en los tiempos sociales y políticos de nuestra región. Estas luchas ponen en cuestión desde la práctica colectiva los clivajes de la desigualdad persistente, los modelos de desarrollo excluyentes y ecológicamente no sustentables, así como la anemia democrática y el autoritarismo. En su desenvolvimiento vetan gobiernos y políticas, promueven demandas que desbordan los canales institucionales, constituyen identidades colectivas, configuran territorios como resistencias y existencias, factualizan experiencias de transformación y superación, renuevan el debate público, ponen *En Movimiento* a la sociedad. Pero la movilización no es patrimonio exclusivo de los sectores populares, ni de las fuerzas progresistas y las izquierdas.

También se hacen presentes acciones colectivas de diverso tipo que se activan en respuesta a avances logrados por estas luchas y por las experiencias de gobiernos populares. La política de las calles y de los campos representa así un elemento significativo en la disputa por el futuro y el horizonte del cambio. El Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales pone a disposición de las y los lectores esta colección de libros que, en clave de difusión, se propone dar cuenta de los principales movimientos, revueltas y conflictos de la América latina y el Caribe del siglo XXI. Desde diferentes tradiciones del pensamiento crítico y las ciencias sociales, la biblioteca *En Movimiento* pone en debate la riqueza y el protagonismo de estas luchas y los senderos de transformación que abren.

Bernardo Mançano Fernandes
Julián Rebón

Introducción

El 7 de diciembre de 2022, el Parlamento del Perú destituyó del cargo de presidente de la República al maestro Pedro Castillo. Acto seguido, los mismos sectores del Parlamento que empujaron la salida de Castillo, juramentaron como presidenta a la entonces vicepresidenta Dina Boluarte. Iniciaba un régimen restaurador al mando de los partidos que perdieron las elecciones, inventaron un fraude y boicotearon un gobierno popular legítimamente electo. La nueva presidenta, la clase política y los grupos de poder económico celebraron la recuperación del Ejecutivo sin imaginar la respuesta que su accionar desataría en los sectores populares del país, especialmente en los Andes.

A pocas horas de la destitución de Castillo, cientos de miles de peruanos a lo largo del país iniciaron el ciclo de protesta más importante de las últimas décadas. Campesinos, pueblos indígenas, maestros, comerciantes, cocaleros, vendedoras de mercados, estudiantes y otros sectores hasta hacía

poco despolitizados, irrumpieron en la escena pública protagonizando una movilización que, por su cobertura territorial, masividad y combatividad, configuró un verdadero estallido. Tras una larga temporada de subalternidad y conflictos dispersos, el campo popular surgido del neoliberalismo se movilizó levantando demandas políticas, confrontando adversarios y afirmando un *nosotros* que reflejaba un protagonismo pocas veces visto. Con epicentro en el sur andino, pero expandiéndose a todo el país, los sujetos movilizados abarrotaron plazas, tomaron carreteras y convocaron solidaridades que les permitieron mantener y ampliar la protesta.

La crisis del régimen que atraviesa la democracia peruana abonó decisivamente al estallido popular. No olvidemos que desde 2016 el sistema político y el modelo económico sufren un profundo deterioro. De un lado, el colapso del sistema político se expresa en la seguidilla de cinco presidentes en seis años, solo dos electos por voto popular y escándalos de corrupción que incrementan la desafección de la ciudadanía. De otro lado, el modelo económico neoliberal, se ha mostrado incapaz de resolver la pobreza y la desigualdad, dejando a las personas desprotegidas en momentos tan duros como la pandemia. Hartos de una clase política que los condenaba a la exclusión, en 2021 los sectores

populares votaron por Pedro Castillo, porque prometía cambios de fondo y era *uno de los suyos* que no iba a traicionar. Pero, desde el inicio, fue despreciado y, como afirman, “nunca lo dejaron gobernar”. Cerrado el camino de la representación electoral, el pueblo asumió la ruta de la protesta. Se ha movilizó no solo para lograr la renuncia de Dina Boluarte y el cierre del Congreso; buscan cambios de fondo como instalar una Asamblea Constituyente que escriba una nueva Constitución.

La presente publicación analiza la dinámica de movilización iniciada el 7 de diciembre de 2022 abordando el proceso de politización de los sujetos movilizados, el *nosotros* colectivo que construyen, sus principales demandas, así como el agenciamiento de recursos y solidaridades que logran concretar. Esto en el marco de la crisis del régimen neoliberal, la arremetida autoritaria encabezada por Dina Boluarte y la exigencia de una nueva Constitución planteada como horizonte democratizador.

El texto, escrito sobre la marcha en una crisis todavía abierta, se compone de cuatro capítulos y un apartado final de conclusiones. En el primer capítulo se aborda el marco histórico de la crisis política, partiendo de la herencia colonial que ha excluido sistemáticamente a la población indígena y campesina, generando desigualdades que se

renuevan con la imposición del neoliberalismo. En el segundo capítulo, se analiza la crisis de régimen en curso, agudizada por la elección de Pedro Castillo como presidente y la politización de sectores sociales excluidos que transitan de la conflictividad social al antagonismo político. En el tercer capítulo, analizamos el estallido social iniciado el 7 de diciembre a raíz de la destitución de Castillo, detallando quiénes son los sectores movilizadores y cuáles sus principales demandas. Finalmente, en el cuarto abordamos las estructuras organizativas que hacen posible la movilización, así como los recursos que se agenciaron y las solidaridades que convocaron para viabilizar la protesta. Terminamos el texto con algunas reflexiones, sobre los posibles escenarios y desenlaces de la crisis y el curso del movimiento popular, que podría volver a la subalternidad o dar un paso hacia un proyecto político transformador donde tenga protagonismo.

El estallido en Perú no es algo inédito ni inesperado, se inscribe en la larga lucha de los sectores excluidos del poder, en especial los pueblos originarios quechuas, aimaras y amazónicos y sus descendientes, por lograr el pleno reconocimiento ciudadano. “No es el 7 de diciembre, son doscientos años” es una frase que se repitió constantemente en el estallido, remarcando que desde el inicio de

la República sus derechos como peruanos fueron negados por élites profundamente clasistas y racistas. Hoy este Perú plebeyo está movilizado y dispuesto a ejercer protagonismo político desafiando incluso la cruenta represión del gobierno que cuenta ya con más de sesenta asesinados y cientos de heridos. Agradezco a las comunidades que me abrieron sus puertas y a los líderes y luchadores sociales que brindaron sus testimonios pese a la criminalización y persecución que enfrentan, razón por la cual algunos nombres fueron cambiados. Más allá del desenlace, han abierto un camino de democratización y cambio que será difícil cerrar, el país ya no es el mismo.

Herencia colonial, neoliberalismo y conflicto

El 28 de julio de 1821 es la fecha acordada en Perú para conmemorar la independencia del régimen colonial. Ese día, José de San Martín decretó el fin del virreinato. Pero *stricto sensu*, no hubo independencia. En el actual territorio peruano, la gesta emancipatoria que recorría el continente estuvo marcada por dos factores claves; la ambigüedad de los criollos locales y la ausencia de un levantamiento popular anticolonial. De un lado, la élite criolla estaba dividida entre el grupo ilustrado y cosmopolita que abrazaba las ideas libertadoras y el grupo vinculado al latifundio, la minería y los obrajes que prefería mantener el orden colonial. De otro lado, la mayoría indígena y la población afrodescendiente esclavizada, apenas se sobreponían a la cruenta represión que siguió al levantamiento de Tupac Amaru II en 1780. La derrota de la “gran rebelión” diezmó la élite indígena y reforzó el control territorial español. Los libertadores

sudamericanos no encontraron ni clase dirigente ni masas populares encaminadas a forjar un horizonte de convivencia compartido para la naciente república peruana.

Justamente, las primeras décadas de la república se caracterizaron por una continuidad colonial que ha marcado profundas fracturas en el Estado y la sociedad. Como señala Cotler (2005), la ruptura del “pacto colonial” descabezó el cuerpo social, llevando a que el naciente Estado no tuviera un centro que dirigiera y ordenara el disgregado organismo social. Tal situación favoreció la emergencia de jefes militares y caudillos regionales que asumían atribuciones patrimoniales configurando un período de guerra y gran desorganización administrativa, económica y social.

Durante el primer siglo de vida republicana los pueblos originarios se encontraban excluidos de su condición ciudadana sin opción de elegir y ser elegidos, sin derechos sociales y constantemente presionados por terratenientes que amenazaban las tierras comunales. Relegados por su lengua, costumbres y cosmovisión, sometidos por el poder gamonal con la complicidad judicial y religiosa, la masa indígena fue sistemáticamente despreciada por la élite criollo-mestiza. De este modo, el Estado actuó por un buen tiempo como “fracción de la casta dominante” por el carácter hereditario de

quienes se turnaron el gobierno mediante distintos partidos o facciones políticas siempre con el aval militar (Zavaleta, 1986). Se configuró la “República aristocrática” que se benefició de la pasajera bonanza económica del guano, dilapidó recursos y mantuvo la tendencia patrimonialista de usufructuar recursos públicos en desmedro de la nación.

La catástrofe de la guerra con Chile reveló la precariedad del Estado peruano y fue también un llamado de atención sobre la viabilidad del país y su construcción de espaldas a la mayoría indígena. Surgieron voces como las de Pedro Zulen y Dora Mayer, fundadores de la Asociación Pro-Indígena, que refutaron la idealización del mundo hispano denunciando la postración del indígena. Estos pensadores dieron lugar al “indigenismo” que planteó la inclusión del indio a la vida nacional por medio de la educación escolar y la valoración de su cultura (Flores Galindo, 1986). Años después, Manuel González Prada cuestionó esta revaloración más bien paternalista, dotándola de un componente político sostenido en la crítica radical a la clase política peruana. González Prada proponía la tarea de construir el “Perú verdadero” cuyos principales protagonistas serían el naciente proletariado industrial y las masas andinas, aunque no profundizó en cómo lograr esta aglutinación (Renique, 2011).

Fue José Carlos Mariátegui quien sistematizó políticamente el “problema del indio” despojándolo de sus componentes idílicos y pasadistas. Para Mariátegui, se trataba de un problema de dominación política y económica, por lo que reivindicar a los pueblos originarios y sacarlos de su postergación, implicaba necesariamente modificar la concentración de la tierra favorable al terrateniente, revalorando a la vez los vínculos colectivos de solidaridad y reciprocidad presentes en las comunidades. El proyecto socialista de Mariátegui enfatizaba en estos componentes étnico-culturales del mundo andino, resaltando que su encuentro con la doctrina socialista podía ser mucho más favorable para enfrentar el orden capitalista occidental (Mariátegui, 1931).

Esta articulación de posiciones ideológicas marxistas vinculadas a la revaloración de lo indígena marcó un hilo de desarrollo fundamental en el pensamiento crítico, la política y la movilización popular. Para Renique (2018), fue el surgimiento de una idea de “nación radical”: Perú lograría ser una nación desarrollada cuando triunfara una “revolución de base indígena” que, sin renunciar a los avances del mundo moderno, recobraría los fundamentos de su glorioso pasado andino. Ello implicaba también la cancelación del legado colonial representado por Lima, abriendo las puertas a una

real integración. Si bien el autor busca explicar con esta propuesta la dinámica de las organizaciones políticas de izquierdas durante el siglo XX, una visión ampliada nos ayuda también a entender los proyectos y movimientos del campo nacional popular en la historia contemporánea, específicamente dos de los más importantes: el régimen nacionalista de Velasco a fines de los sesenta y el estallido popular del 7 de diciembre de 2022.

Proyecto desarrollista y revaloración campesina

Ya en el siglo XX, el decadente Estado oligárquico se resistía a ceder el poder, incrementándose la polarización política y social. La escandalosa concentración de la tierra en las haciendas andinas o latifundios de la costa dio lugar a una intensa movilización campesino-indígena que exigía la redistribución de la tierra con una masividad y radicalidad que amenazaba la totalidad del orden institucional. En las ciudades, y especialmente en Lima, la afluencia de migrantes que llegaban buscando mejores condiciones de vida intensificaba las demandas de empleo, vivienda, y servicios

públicos. Se producía a la vez la “cholificación” de la sociedad como un proceso de integración y estrategia de movilidad social de los migrantes andinos y amazónicos que llegaban a las ciudades (Quijano, 2000).

Se necesitaba emprender reformas profundas en el Estado y la sociedad peruana. Fernando Belaúnde, electo presidente en 1963 por Acción Popular, intentó realizar estas reformas “sin rupturas bruscas” pero no tuvo éxito. La irrupción de guerrillas en la selva motivadas por la triunfante revolución cubana, la toma de tierras en La Convención y otras haciendas de la sierra por parte de arrendatarios y comunidades, complicaron más la situación. Tal como lo entendió un grupo de militares nacionalistas, en un escenario de gran desigualdad y exclusión, estas luchas y movilizaciones podían generar una convulsión social sin precedentes.

La conclusión a la que arribaron los militares era la misma a la que habían llegado algunos intelectuales y profesionales: el sistema democrático era inservible para lograr la transformación del país. Por lo tanto, el 3 de octubre de 1968 la Junta militar al mando del general Juan Velasco Alvarado derrocó al presidente Belaunde y tomó el mando dando inicio al denominado “Gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas” (Cotler, 2005).

El gobierno militar puso en marcha un ambicioso proyecto de reformas estructurales orientadas a desarrollar, modernizar y cohesionar la nación peruana. Desplegó una política de nacionalizaciones y estatizaciones ampliando la función de acumulación y producción del Estado. También puso límites al capital extranjero y nacionalizó recursos naturales estratégicos como los minerales y el petróleo. Se crearon importantes empresas públicas como Petro Perú, Hierro Perú, ENTEL Perú (para las comunicaciones), entre otras, que ensancharon considerablemente el aparato estatal. Para garantizar la sostenibilidad de las reformas, el gobierno militar apostó por un modelo de participación popular a través del Sistema Nacional de Movilización Social (SINAMOS) encargado de impulsar y coordinar con los sindicatos y organizaciones sociales afines al gobierno.

Uno de los actos más importantes del gobierno militar fue la reforma agraria que según datos del Instituto Nacional de Estadística (INEI) distribuyó 10.298.000.000 de hectáreas entre 3.999 familias campesinas afectando al 55,3% de la superficie agrícola y el 40% de las familias rurales. Este proceso constituyó una de las reformas más radicales de Latinoamérica y significó la liquidación de la base del poder terrateniente. Asimismo, la reforma incluyó una visión cooperativista, de modo

que quienes se beneficiaron no fueron individuos privados sino las asociaciones y comunidades en donde ellos participaban y en cuya dirección el Estado tenía presencia importante. Muchas de las haciendas se transformaron en Cooperativas Agrarias de Producción (CAPS) o Sociedades de Interés Social (SAIS) buscando facilitar así su incorporación en un patrón moderno de producción y comercialización.

En lo político, la reforma agraria permitió centralizar la autoridad del Estado eliminando poderes locales como el gamonalismo y dio pasos importantes para eliminar la exclusión basada en la raza y la etnia. En tal sentido se promulgó la Ley 21.156 que reconocía al quechua como lengua oficial y establecía el bilingüismo en todo el país. Asimismo, desarrolló una ambiciosa Reforma Educativa que modernizó los programas escolares, amplió la cobertura y potenció la educación superior a niveles aún no superados.

Es importante destacar que el gobierno de Velasco no reivindicaba lo indígena desde lo étnico ancestral, sino que asumió una matriz clasista productiva. Era el campesino quien, a partir de su fuerza de trabajo y la conexión con la tierra, daría lugar a un nuevo Perú orgulloso de su historia milenaria que incluía su lengua y costumbres. El proyecto desarrollista, asoció el término indígena

al pasado y la exclusión, al punto que de manera oficial se reemplazó a la comunidad indígena por la “comunidad campesina”. Los gremios agrarios como la Confederación Nacional Agraria CNA (velasquista) y la Confederación Campesina del Perú CCP (autónoma) asumieron también esta matriz que miraba a la clase campesina como protagonista del cambio. Casi medio siglo después, los peruanos de los Andes, descendientes de esos indígenas/campesinos beneficiados por la reforma agraria, reconocen a Velasco como un personaje fundamental de la historia local y nacional. Para ellos es quien terminó con un ciclo de dominación.

La enfermedad y muerte de Velasco cerraron la primera fase del gobierno militar. En la siguiente etapa liderada por el general Francisco Morales Bermúdez, se intentaron detener e incluso dismantelar las reformas velasquistas. Pero el país había cambiado radicalmente y crecían las demandas por profundizar y ampliar derechos. Luego de importantes paros y movilizaciones, en un contexto favorable al retorno a la democracia en América Latina, se acordó una transición que incluyó la convocatoria a elecciones generales y la instalación de una Asamblea Nacional Constituyente encargada de escribir una nueva Constitución.

En 1979, la Asamblea Constituyente promulgó una Constitución que decretaba un Estado garante

de derechos y proponía un horizonte de justicia social, responsabilidad colectiva y ampliación ciudadana. Por primera vez en la historia se aprobó el voto universal, incluyendo a la población analfabeta generalmente indígena. Se estableció además el carácter inembargable, imprescriptible e inalienable de las tierras de las comunidades campesinas, y se formularon criterios para descentralizar el país con regiones y macrorregiones que pusieran fin a la larga tradición centralista que enfrentaba Lima a las provincias.

El proyecto desarrollista y modernizador liderado por Velasco impulsó un proyecto nacionalista orientado a construir una identidad compartida sobre las bases del reconocimiento del mundo andino y su fuerza cohesionadora. Asimismo, encauzó buena parte de la movilización popular campesina indígena en el proceso de reforma agraria, transformando irreversiblemente el mundo rural. La Constitución de 1979 refrendó estos cambios, pero su adecuada implementación necesitaba medidas legislativas y ejecutivas que nunca se concretaron. El segundo gobierno de Belaúnde siguió la senda restauradora anti-reformista de Morales Bermúdez y el primer gobierno de Alan García apostó por un populismo tardío que terminó de colapsar la economía con una hiperinflación nunca vista. La crisis económica y el cruento conflicto

armado que afectó especialmente a la población indígena, abonaron decisivamente al colapso desarrollista (CVR, 2009).

A inicios de los noventa, la crisis generalizada que afectaba la economía, la política y la sociedad, se cerraría de forma autoritaria por una coalición de la derecha económica y poderes mafiosos al mando de Alberto Fujimori. Esta coalición impuso el neoliberalismo como régimen de gobierno y convivencia social, terminando con el ciclo de nacionalismo andino popular desarrollista y abriendo uno nuevo marcado por relaciones de subalternidad y conflicto.

Neoliberalismo, subalternidad y conflicto

A inicios de los noventa, el neoliberalismo en Perú se instaló en sus tres acepciones principales. Como *un programa intelectual* orientado a restaurar el liberalismo amenazado por las tendencias colectivistas del siglo XX. Como un *programa político* compuesto por leyes, arreglos institucionales, criterios de política económica y fiscal que asignan al Estado la tarea de promover la inversión privada. Y, finalmente, como un *modelo de sociedad*, un régimen de

existencia que impone una determinada racionalidad y formas de convivencia susceptibles de reproducirse también desde abajo, en las subjetividades y prácticas populares (Gago, 2013).

El neoliberalismo transformó la estructura social y las subjetividades, manteniendo desigualdades históricas y generando nuevas. Se configuraron así renovadas relaciones de subalternidad, entendidas como experiencias de incorporación y aceptación relativa de la relación mando-obediencia capaces de producir a la vez rechazo y resistencia (Modonesi, 2010). Desigualdades como el racismo y el machismo se mantuvieron, generando subalternidad y adaptación a las nuevas condiciones, pero a la vez rechazo y resistencia que derivó en un incremento de la conflictividad social.

En un país agobiado por la crisis económica, el conflicto armado y la debacle del sistema de partidos, el autogolpe del 5 de abril de 1992 perpetrado por Alberto Fujimori permitió la imposición autoritaria del neoliberalismo. La disolución del Congreso y la intervención del Poder Judicial, la Contraloría, el Tribunal de Garantías Constitucionales y los gobiernos regionales, otorgaron a la dictadura el poder necesario para llevar adelante las reformas estructurales consignadas en el Consenso de Washington. Asimismo, para garantizar la estabilidad del modelo, en 1993 se promulgó

una nueva Constitución Política colocando los “candados” o garantías necesarias para frenar futuros cambios. De modo similar a lo ocurrido en el Chile de Pinochet, los cambios estructurales requeridos por el modelo implicaron el ejercicio de una fuerte dosis de violencia y autoritarismo.

La imposición del neoliberalismo significó un cambio en el patrón de producción y acumulación de la economía y una profunda reestructuración del aparato público. La gran mayoría de empresas estatales fueron privatizadas y se facilitó el ingreso del capital transnacional especialmente para la inversión minera y petrolera con condiciones tributarias extraordinarias que a la larga se harían permanentes. Se promovió además el ingreso de nuevos negocios que prosperaron a costa de lucrar con los derechos laborales, como es el caso de las Aseguradoras de Fondos de Pensiones (AFP). Junto a ello, se eliminaron derechos laborales conquistados, como la estabilidad o la sindicalización, imponiéndose como regla la tercerización y el empleo temporal. Vale señalar que este festival de privatización de empresas públicas, concesión de recursos naturales y anulación de derechos se realizó en un contexto autoritario de enorme discrecionalidad, favoreciendo esquemas de corrupción y enriquecimiento ilícito del grupo fujimorista gobernante y sus aliados.

Por su parte, los sectores populares debieron adaptarse a un modelo de economía y sociedad que priorizaba el individualismo y el libre mercado, minimizando la protección estatal y erosionando los vínculos sociales. Los individuos debían asumir la responsabilidad de costearse servicios básicos como salud, educación o transporte en un escenario de brutal competencia y escasa regulación. Se configuró un mundo popular de trabajadores informales sobreviviendo al día en empleos precarios o vinculados a las economías ilícitas, como los cultivos de coca, la tala de madera o la minería informal. La promesa neoliberal de éxito para los emprendedores legitimó la creciente desigualdad y sedimentó la subalternidad en las mayorías excluidas. Pese a todo, las redes comunitarias de reciprocidad y solidaridad vinculadas a la cultura andino-amazónica lograron mantenerse, aportando a una subsistencia más digna.

La caída del fujimorismo el 2001 no significó el fin del régimen neoliberal, por el contrario, los sucesivos gobiernos elegidos tras el retorno a la democracia mantuvieron el modelo prácticamente intacto, incluyendo el marco constitucional. Los altos precios internacionales de los *commodities* intensificaron la dinámica extractiva priorizando la concesión de minerales, gas y petróleo e incrementando la presión sobre los territorios comunales e

indígenas. Junto a ello, se expandió el comercio informal y las actividades vinculadas al sector servicios tales como transporte interprovincial, restaurantes y venta de comida. Cocineros, moto-taxistas, colectiveros proliferaron junto a jornaleros de la agroexportación, cocaleros o mineros informales. El mundo del neoliberalismo popular urbano y semi-rural se reprodujo de manera vertiginosa.

El hecho de que los sectores populares aceptaran la dominación del modelo asumiendo una situación de subalternidad, no quiere decir que no existiera rechazo o resistencia. Durante las tres décadas de neoliberalismo y con particular impulso tras la caída de Fujimori, las impugnaciones al sistema dieron lugar a una serie de conflictos sociales que, pese al tejido social debilitado y la crisis de representación, consiguieron cuestionar aspectos medulares de la economía y la política.

Según la página web de la Defensoría del Pueblo, los conflictos sociales se entienden como “procesos complejos en los cuales sectores de la sociedad, el Estado o las empresas perciben que sus posiciones, intereses, objetivos, valores, creencias o necesidades son contradictorios, creándose una situación que podría derivar en violencia” (Defensoría del Pueblo, 2022). En general, por su persistencia, masividad y capacidad de interpe-lación al Estado, podemos destacar dos tipos de

conflictos sociales presentes hasta el 7 de diciembre del 2022. Un primer tipo relacionado con la demanda de trabajadores organizados en gremios y sindicatos por derechos laborales, mejoras salariales o cambio al marco legal vigente. Es el caso por ejemplo del sindicato de maestros, los obreros de Construcción Civil, las trabajadoras de limpieza pública o los peones de la agroexportación. Un segundo tipo refiere a los denominados conflictos “socio ambientales” protagonizados por pueblos indígenas y comunidades campesinas en torno a la defensa del territorio, los recursos naturales y el medio ambiente. Aquí se ubican las masivas protestas desarrolladas a causa del avance de la industria extractiva en Cajamarca, Espinar o Islay en los Andes y Bagua o Pichanaki en la Amazonía.

Junto a estos dos tipos principales de conflictividad social, ocurren otros vinculados a diferentes aristas de la economía informal e incluso ilegal. Es el caso de las protestas de transportistas, moto-taxistas y colectiveros, productores agropecuarios, cultivadores de hoja de coca, mineros informales, vendedores ambulantes u otros que se oponen a medidas como la regulación estatal, la erradicación de cultivos u otras que afecten sus intereses.

Todos estos conflictos sociales se caracterizaron por su carácter sectorial, más o menos economicista, la dispersión territorial y la ausencia de

plataformas y liderazgos unificadores. Asimismo, aunque lograron cuestionar aspectos medulares del modelo neoliberal como la política laboral, el extractivismo o la afectación del medio ambiente, no lograron enunciar una crítica política sistémica vinculada a la urgencia de cambios de fondo. Tal como afirma Eugenio, agricultor y presidente del Frente de lucha de la nación Chanka en Andahuaylas, existía un descontento que generaba movilización y demandas al Estado, pero todavía no había suficiente conciencia sobre lo político, esa es la diferencia con las protestas del 2022:

Claro que nos hemos movilizado antes, nosotros somos agricultores y el 2018 hemos hecho paro por el precio de la papa. Nos han mandado a la policía, al MIDAGRI, a PCM hasta que se ha logrado un acuerdo. Nos hemos movilizado antes muchas veces, pero hoy esta protesta es diferente, es nacional y netamente política.

Los escenarios de conflictividad social expresaron un creciente rechazo al sistema y una radicalidad que no era ideológica ni se identificaba con los partidos políticos de izquierda que arrastraban una larga crisis. Siguiendo a García Linera (2015), los escenarios de impugnación al neoliberalismo reconfiguran al sujeto popular, que ya no es solo

obrero o campesino, sino que tiene componentes obreros, comunitarios, antineoliberales y que avanza en reconocer la dominación desde un campo plebeyo popular. La pandemia del COVID-19 y la elección de Pedro Castillo, aceleraron un proceso de politización removiendo la subalternidad sedimentada por la herencia colonial y renovada por el neoliberalismo. Las mayorías “plebeyas” –informales, precarizadas, provincianas, semi-rurales e indígenas– que protestaban esporádicamente, expresan políticamente su anhelo por dirigir la nación, avanzan en identificar adversarios y disputar representación; transitan de la conflictividad al antagonismo.

La disputa política. De la conflictividad social al antagonismo

Tras la caída de Alberto Fujimori en 2001, los distintos gobiernos priorizaron mantener el modelo económico, desatendiendo no solo la conflictividad social sino también la urgencia de reformar el sistema político impuesto por un régimen autoritario y mafioso. En tanto la economía exhibía buenas cifras macroeconómicas, los grupos de poder no avanzaron con las reformas y mucho menos hicieron cambios al marco constitucional. Autoridades y élites empresariales se beneficiaron del crecimiento macroeconómico involucrándose incluso en esquemas de corrupción, como ocurrió con el caso Odebrecht que incluyó a altos funcionarios, como los expresidentes Alan García, Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski.

Pero si la economía caminaba bien para la minoría privilegiada, el régimen político se deterioraba

aceleradamente para todos. La transición a la democracia no estuvo acompañada de una reforma sustantiva a la institucionalidad democrática y el régimen político. Por el contrario, la imposibilidad del fujimorismo y sus aliados de la derecha para ganar el Ejecutivo orientaron su acción hacia el Congreso, usando esta institución para imponer en la práctica un parlamentarismo. Es el Congreso la instancia que designa integrantes de instituciones claves como el Tribunal Constitucional o la Junta Nacional de Justicia. Es el Congreso quien decide cuándo usar figuras constitucionales como la “vacancia por incapacidad moral”¹ para destituir al presidente de la República. El Tribunal Constitucional, cuyos miembros son elegidos por el mismo Congreso, debió delimitar el uso de la vacancia, pero prefirió delegar la tarea a los parlamentarios, afectando seriamente el equilibrio de poderes y generando gran inestabilidad.

La crisis política y el viraje al parlamentarismo fue más evidente desde el 2016 cuando Kuczynski ganó la presidencia a Keiko Fujimori por apenas

1 La vacancia por incapacidad moral fue incluida en la Constitución de 1993 para casos graves de enfermedad o salud mental, pero desde el 2016 empezó a usarse a discrecionalidad de la mayoría parlamentaria.

45 mil votos. Sin conseguir el Ejecutivo, pero contando con una mayoría parlamentaria calificada, el fujimorismo y sus aliados utilizaron el Congreso para obstaculizar un gobierno débil e involucrado en el caso *Lava Jato* por negociados de las empresas de PPK cuando fue ministro. La renuncia de Kuczynsky ante una inminente moción de vacancia, intensificó la crisis. El vicepresidente Martín Vizcarra asumió la presidencia desarrollando un período marcado por la confrontación con el Parlamento. Vizcarra terminó por cerrar el Congreso, pero paradójicamente, los nuevos congresistas lo destituyeron. Tras una componenda de la ultraderecha, el congresista Manuel Merino fue proclamado presidente, pero su elección generó tal rechazo que renunció a los cuatro días. El Parlamento designó como presidente transitorio a Francisco Sagasti, prácticamente con la exclusiva tarea de organizar las elecciones generales del 2021.

Todas estas maniobras incrementaron el repudio de los sectores populares hacia la clase política. La pandemia del COVID-19 agravó la situación configurando una verdadera tragedia que costó la vida a más de 90 mil personas el 2020.² Quedó demostrado que, pese al voceado crecimiento económico, la

2 Según datos del Ministerio de Salud cerró 2020 con 94 mil fallecidos por COVID, colocándose como el segundo

salud pública era catastrófica y el Estado era incapaz de poner límites al lucro desmedido de clínicas privadas y especuladores de oxígeno. También se evidenció la dramática desprotección social de la gran mayoría de peruanos relacionada con una altísima tasa de empleo informal que alcanza el 71% de la población económicamente activa (INEI, 2020).

En un país devastado por la pandemia, las elecciones generales de abril de 2021 actuarían como un catalizador del enorme descontento social. Electoralmente, los sectores más excluidos, especialmente del sur andino y la Amazonia, habían canalizado su rechazo al sistema votando por candidatos que proponían cambios de fondo, incluyendo una nueva constitución. Esto se reflejó el 2006 cuando Ollanta Humala sacó un 30% en primera vuelta y también cuando en 2011 el 51% de la población lo eligió presidente. La traición de Humala no menguó la demanda de cambios y en 2016 un 20% votó por la izquierdista Verónica Mendoza. Sistemáticamente, casi una cuarta parte del electorado se aferraba a la premisa básica de la democracia liberal, según la cual con su voto podían lograr los cambios necesarios para vivir mejor.

país con mayor letalidad en América Latina (Datos abiertos, 2020).

En 2021 nuevamente los sectores populares buscaban elegir alguien que impugnara frontalmente el sistema, pero esta vez tenía que ser directamente uno de los suyos. La sociedad plebeya surgida en adaptación y resistencia al neoliberalismo, conformada por trabajadores informales y precarizados junto a sectores emergentes de comerciantes y microempresarios principalmente provincianos, se estaba politizando, pasando de la conflictividad en términos subalternos, a un antagonismo con mayor conciencia política.

Desde el marxismo, el antagonismo se vincula con el problema de la conciencia; los sectores dominados que suelen expresar su disconformidad en manifestaciones de protesta más bien reactivas identifican un adversario antagonista con quien disputar protagonismo político. La noción de antagonismo ayuda a explicar los procesos de disputa caracterizados fundamentalmente por la impugnación y la lucha contra la dominación existente, permitiendo proyectarse hacia la construcción de nuevas relaciones de poder para construirse como sujeto autónomo (Modonesi, 2010). *Ad portas* las elecciones del 2021, los sectores plebeyos en el Perú avanzaban en reconocer intereses compartidos opuestos al de las élites dominantes. La posterior elección de Pedro Castillo y el desarrollo de su gobierno afirmarían este momento antagonista que sucedió al ciclo de subalternidad.

La elección de Pedro Castillo: el otro Perú en escena

El domingo 11 de abril de 2021, en medio de una gran fragmentación política (18 partidos en competencia) los ganadores de la primera vuelta electoral fueron Pedro Castillo con un 19% de los votos y Keiko Fujimori con el 13% (ONPE, 2021). Para el *establishment* limeño y la clase política tradicional lo ocurrido fue una sorpresa. Medios de comunicación y analistas políticos se preguntaban de dónde salió ese “hombrecito con sombrero” que podía convertirse en presidente.

Pero el sector de peruanos que lo había elegido sí sabía quién era Castillo. Natural del distrito de Tacabamba, provincia de Chota en la región Cajamarca, Pedro Castillo Terrones era el tercero de los nueve hijos de dos agricultores analfabetos beneficiarios de la Reforma Agraria. Luego de estudiar en el Instituto Pedagógico de Cutervo, Castillo se desempeñó como maestro rural y fue uno de los impulsores del gremio de profesores disidente al Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Perú (SUTEP). Desde 2001 con la vuelta a la democracia, docentes de diversas regiones formaron bases regionales críticas al SUTEP y emprendieron

acciones de protesta demandando mejores condiciones laborales. Castillo recorrió el país consolidando las bases de la Federación Nacional de Trabajadores de la Educación (FENATE) gremio que alcanzaría mayor notoriedad con el Paro Nacional Docente de 2017, cuando miles de maestros llegaron a Lima en demanda de mejoras salariales. Si bien el ministro de Educación y las principales bancadas del Congreso “terruquearon”³ a los dirigentes acusándolos de ser cercanos a Sendero Luminoso, la huelga consiguió posicionar a los maestros como un actor político importante, maltratado por el gobierno, pero capaz de generar conciencia y solidaridad.

Además de dirigente sindical, Pedro Casillo había incursionado en la política electoral y activaba en distintos movimientos sociales. En el año 2002 se presentó como candidato a alcalde de su distrito por Perú Posible y el 2020 intentó ser candidato al Congreso por Cajamarca acercándose al Frente Amplio, aunque no concretó su candidatura. En el ámbito social, Castillo era un rondero afiliado a las Rondas

3 En Perú, la palabra “terruquear” es utilizada para asignar a algún adversario, que tiene propuestas de izquierda o críticas al sistema comportamientos terroristas o incluso ser miembro de grupos armados, con el fin de desprestigiarle o que su discurso se vea invalidado.

Campesinas de Cajamarca, estructura comunitaria de seguridad ciudadana y control territorial con especial fuerza en la sierra norte del Perú. Fue también dirigente de la Coordinadora de Frentes de Defensa que junto a Magno Ortega del Frente Defensa de Ayacucho buscó conformar una plataforma política.

A pocos meses del cierre de las listas electorales, los maestros del FENATE liderados por Pedro Castillo lograron un acuerdo con el Partido Perú Libre para participar de forma conjunta en la fórmula presidencial y la lista al Congreso. Perú Libre se definía como un partido marxista leninista y era liderado por el expresidente regional de Junín y médico neurocirujano Vladimir Cerrón. Este estaba impedido de participar como candidato por enfrentar acusaciones de corrupción en su gestión regional, pero colocó a la abogada Dina Boluarte como candidata a la vicepresidencia. El acuerdo resultaba bueno para ambas partes: Perú Libre se vinculaba con un actor social con presencia en todo el país que le permitiría pasar la valla electoral; Castillo y sus docentes obtendrían mayor notoriedad nacional y podrían ganar algunos escaños para impulsar sus demandas sindicales desde el Parlamento.

Para los sectores populares, el maestro rural, sindicalista, rondero y dirigente de los Frentes de Defensa no era entonces tan desconocido; por el contrario, su protagonismo iba en ascenso. Como

afirma Claudio, agricultor de Andahuaylillas en Cusco, Castillo ganó terreno como figura nacional y logró desplazar a otros personajes de la izquierda:

El apoyo a Castillo vino con fuerza desde el año 2020, incluso antes cuando se hizo conocido por la lucha como maestro en la huelga. Previo a las elecciones los dirigentes, las autoridades comunales, locales ya lo ubicábamos. El 2021 apoyamos a Pedro porque pensamos era una alternativa de solución a los problemas de las clases populares, porque era como nosotros, venía de la lucha. Aquí teníamos a Verónica Mendoza que es nuestra paisana, pero ella ya hacía sus acuerdos en la capital, ni siquiera venía y no nos gustaba eso, ya no representaba nuestros problemas.

En campaña, Pedro Castillo y Perú Libre se enfocaron territorialmente en el sur y en el apoyo activo de maestros y campesinos. Con escasos recursos, “el profe” recorrió el país desobedeciendo protocolos sanitarios y priorizando hablarle a los sectores populares en grandes mítines, radios locales y redes sociales, especialmente *Facebook* o grupos de *WhatsApp*. Desestimó convencer a las clases medias urbanas y evadió los grandes medios de comunicación a los que no lo invitaban por

considerarlo un candidato “sin opciones de ganar”. Paradójicamente, ser desconocido y ninguneado por el *mainstream* limeño, le permitió estar menos asociado a la clase política, algo muy valorado en un país donde los electores odian a los políticos.

Recorriendo los pueblos a caballo y dirigiéndose a la gente con carisma, sencillez y radicalidad combativa, el candidato Castillo acumulaba seguidores silenciosamente. Su mensaje, alejado de todo tecnicismo y complejidad ideológica, era sumamente pragmático, con promesas específicas para cada sector: a los transportistas les ofrecía eliminar las multas, a los agricultores préstamos inmediatos, etc. No sustentaba técnicamente ninguna de sus propuestas, pero el tono contestatario era suficiente para captar la atención de miles de peruanos hartos de los abusos. Además, Castillo agitaba la bandera de la nueva Constitución escrita por una Asamblea Constituyente donde participaran las fuerzas vivas de la sociedad. Sin ser percibido por las encuestas, el profe desplazó en el sur andino al candidato de Acción Popular Yoni Lescano y en las izquierdas a Verónica Mendoza. Finalmente, sumó a muchos indecisos de las ciudades. La última semana la derecha detectó su crecimiento y empezó a atacarlo, pero ya era tarde. Castillo quedó en primer lugar con un 20% de los votos; el “núcleo duro” que votó guiado por dos

componentes principales: la identidad que los llevó a elegir a uno del pueblo *como ellos*, y el rechazo a la clase política que los hizo elegir al menos contaminado, al más nuevo.

La segunda vuelta electoral entre Keiko Fujimori y Pedro Castillo polarizó al Perú. De un lado, el fujimorismo y la derecha peruana se presentaban como la salvación frente a la amenaza comunista. Del otro lado, Castillo concentró el respaldo de los sectores populares que demandaban cambios de fondo y sumó el apoyo de colectivos y grupos de clases medias conocidos por su “antifujimorismo”. Fueron dos meses de guerra sucia, estigmatización y noticias falsas contra Pedro Castillo y su equipo por parte de los grandes medios de comunicación y grupos empresariales alineados con la candidata Fujimori. El racismo y el clasismo estuvieron a la orden del día haciendo escarnio y burla del candidato chotano y sus electores, a quienes presentaban como burros, sucios e ignorantes. La derecha internacional también intervino en la campaña bajo la activa batuta de Mario Vargas Llosa, quien convocó a Leopoldo López y otras personalidades del entonces existente Grupo de Lima.

En junio de 2021, con el 100% de las actas contabilizadas, Pedro Castillo fue proclamado ganador por una diferencia aproximada de 50 mil votos.

Este ajustado resultado fue mal recibido por la candidata perdedora y sus aliados, quienes siguiendo la estrategia trumpista, denunciaron un fraude a todas luces inexistente. El fujimorismo y la ultraderecha convocaron a los mejores estudios de abogados para impugnar votos indígenas y rurales, aludiendo supuestos malos manejos en las mesas de sufragio (Ojo Público, 2021). Pese a que los organismos electorales, veedores internacionales y la fiscalía se pronunciaron sobre la pulcritud de los comicios, Keiko Fujimori y sus seguidores tacharon 200 mil votos del sur andino y la amazonia, protagonizando además violentas protestas contra las autoridades electorales.

Estas impugnaciones de la derecha dilataron la proclamación del nuevo jefe de Estado y movilizaron a los seguidores de Castillo que llegaron a Lima desde distintas regiones del país para defender su voto. Maestros, ronderos y campesinos acamparon en las puertas del Jurado Nacional de Elecciones y marcharon por Lima con sus trajes típicos, machetes y sombreros provocando nuevos ataques racistas. Como afirma la profesora Gioconda de Abancay, no era justo que se desconocieran sus votos:

En las elecciones del 2021 participé muy activamente, yo soy maestra y desde el inicio he

apoyado a Pedro Castillo, nunca me inscribí a Perú Libre, pero trabajamos en la campaña. Como éramos docentes, decíamos “tenemos que arriesgar, es momento de tomar la batuta como pueblos originarios, como Perú profundo” *y así hicimos. Trabajamos duro primera y segunda vuelta*, hemos tenido que ir a Lima a defender el voto porque no era justo, no era justo que dijeran fraude... Y lo logramos, pusimos nuestro presidente.

El 28 de julio del 2021, efectivamente los sectores populares, principalmente campesinos, indígenas, informales y semi-rurales lo lograron: pusieron por primera vez a un presidente. Pero lo vivido durante el proceso electoral y los resultados finales configuraban un escenario político muy tenso. La derecha peruana expuso con total desfachatez su vena autoritaria y violenta, demostrando ser capaz de desconocer las reglas de juego democrático, inventar un fraude y desprestigiar a las instituciones electorales con tal de no ser derrotada. Para los sectores populares que respaldaban a Castillo, fue una gran lección de politización y aprendizaje antagonista; si querían conservar el poder del Estado tendrían que disputarlo permanentemente.

Gobierno asediado y antagonismo político

La juramentación de Pedro Castillo como presidente de la República estuvo cargada de simbolismo nacionalista, andino y popular. Luego de la ceremonia oficial en el Congreso de la República, Castillo se trasladó a la Pampa de la Quinoa en Ayacucho, lugar donde se libró la batalla que selló la libertad del continente. Rodeado de miles de personas y junto a los presidentes de Argentina, Bolivia, Chile, el expresidente boliviano Evo Morales y otras autoridades, se comprometió a llevar adelante un gobierno del pueblo que culminara la inconclusa independencia. Con este acto, el flamante presidente reafirmaba un *nosotros* y antagonizaba con los grupos de poder pues, aunque el mensaje se esforzara en sonar conciliador, la sola presencia de Castillo en medio de los Andes rodeado de pueblo provinciano delineaba el campo de representación marcado por componentes étnicos, territoriales y de clase.

Pero el potente simbolismo no podía atenuar la complicada situación que enfrentaba el nuevo gobierno. De un lado, la coalición opositora –conformada por partidos de derecha, grupos de poder económicos, medios de comunicación, militares en retiro,

entre otras fuerzas conservadoras— estaba decidida a impedir que Castillo culminara su gobierno y no iban a escatimar ningún mecanismo con tal de lograr su objetivo. Del otro lado, el gobierno debía enfrentar sus propias limitaciones, producto de la inexperiencia de Castillo y las dificultades de sus aliados para cohesionar un bloque que lo respaldara desplegando una estrategia de confrontación con la derecha y un mejor relacionamiento con su base social.

En el marco de una grave crisis de régimen, se hizo más tangible la tensión entre una derecha empoderada, con unidad de intereses, representación parlamentaria, conexiones con el Poder Judicial y el respaldo de los medios de comunicación, frente a un presidente débil, sin mayoría parlamentaria y presionado por sus aliados de izquierdas por puestos de poder. Aceleradamente, la situación llevó a la ciudadanía a tomar partido y reconocerse en uno u otro lado de la disputa. Se intensificó el proceso de politización antagonista, clave para entender el estallido social iniciado el 7 de diciembre.

Durante los quince meses de gobierno, los campos enfrentados organizaron la acción colectiva activando mecanismos legales, políticos y acciones de calle. En el campo opositor a Castillo el protagonismo lo asumió una coalición política e ideológicamente de derechas, diversa pero unificada en torno al objetivo de retomar el poder del Ejecutivo

y salvar el moribundo modelo neoliberal. Dentro de este grupo estaban partidos políticos como el fu-jimorismo o Renovación Popular, grupos de poder económico como la CONFIEP, también medios de comunicación como el grupo El Comercio. Se sumarían después la Fiscalía, el Poder Judicial y las Fuerzas Armadas y policiales. Este concierto de intereses llegó a actuar como una coalición golpista, entendida como la articulación de poderes institucionales, económicos, mediáticos y judiciales trabajando activa y coordinadamente para destituir a un presidente constitucionalmente electo.

El Parlamento fue el principal centro de manio-bra de la coalición golpista, manipulando desde ahí la legalidad vigente para desestabilizar el gobierno y destituir a Castillo. En primer lugar, abusaron de la figura de “vacancia por incapacidad moral”, presentando tres pedidos de vacancia en quince meses. Por otro lado, intentaron la inhabilitación constitucional del presidente, forzando una acu-sación de “traición a la patria” por declaraciones favorables a la salida al mar para Bolivia. También se abocaron a sabotear el gobierno, interpellando y censurando ministros de Estado al tiempo que bloqueaban las iniciativas legislativas del Ejecutivo e impedían los viajes del presidente al extranjero con argumentos denigrantes. Mecanismos parla-mentarios de control político que hasta entonces

operaban como formalidades, se convirtieron en armas de presión política.

Como muestra de la guerra declarada y su disposición a bloquear cualquier cambio, el Congreso rechazó la propuesta del Ejecutivo para convocar a referéndum constitucional y aprobó la denominada “Ley anti-referéndum” que restringe el derecho ciudadano a convocar a una consulta sobre el cambio de Constitución. Finalmente, la mayoría parlamentaria modificó la facultad presidencial de disolver el Parlamento tras dos Cuestiones de Confianza rechazadas, señalando que el mismo Parlamento debía definir si tales Confianzas procedían o no. En la práctica, acabaron con el equilibrio de poderes, siempre con la venia del Tribunal Constitucional electo por el mismo Congreso.

La Fiscalía también jugó un rol fundamental en el asedio al gobierno. La Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, tomó la inédita decisión de investigar a un presidente en funciones, reinterpretando la Constitución de 1993, y acusó a Pedro Castillo de liderar una “organización criminal”. En nombre de la lucha contra la corrupción, la Fiscal abrió más de sesenta carpetas fiscales contra el presidente y su entorno cercano, incluyendo a su esposa y su hija por casos de presunto peculado y tráfico de influencias. Sin pruebas contundentes, pero con gran amplificación mediática, cada

semana la Fiscalía presentaba acusaciones basadas en reportajes periodísticos que abonaban a la imagen de un gobierno tomado por la corrupción. Se configuraba a todas luces un caso de *lawfare* funcional a la estrategia golpista y articulado con la oposición parlamentaria.

Los partidos del “centro político” y asociaciones de sociedad civil también se sumaron al campo opositor exigiendo la investigación de las denuncias de corrupción y criticando la ausencia de meritocracia en el Estado. El Partido Morado y ONG como Transparencia o la Coordinadora de Derechos Humanos impulsaron la iniciativa legislativa para adelantar elecciones presidenciales y parlamentarias, argumentando que ambas instituciones estaban igual de cuestionadas por la ciudadanía. Tal postura fue rechazada por organizaciones populares que afirmaban haber elegido un presidente constitucional por cinco años. En un contexto de hegemonía de la ultraderecha, la propuesta de adelanto de elecciones no consiguió apoyo y más bien terminó siendo funcional a los intereses de la coalición golpista.

En términos de movilización, todos los domingos los grupos opositores organizaron marchas a favor de la vacancia. Estos eventos se concentraban en el centro de Lima y contaban con la asistencia de congresistas de la ultra derecha y empresarios que

desfilaban junto a personas de los distritos mesocráticos de Lima, generales y policías en retiro. Si bien eran actos cuantitativamente minoritarios, la persistencia y beligerancia de los manifestantes, con claro desprecio racista y clasista contra el presidente, su familia y sus partidarios, agudizaban la confrontación y remarcaban la línea de *nosotros y ellos*.

La arremetida del campo opositor fue seguida con atención por los sectores populares, especialmente andinos y amazónicos que se identificaban profundamente con Pedro Castillo. Como afirma Luis Cruz, alcalde del Centro Poblado de Itapalluni, provincia de Ilave en la región Puno, existió un ataque desmedido contra el presidente:

Esos en Lima nunca quisieron que gobernara un maestro rural. Inclusive antes que asumiera, cuando se ha ganado las elecciones no reconocían el triunfo del profesor Castillo y cuando asumió la prensa mermelera atacaba todo el tiempo... Todo era Castillo, desayuno Castillo, cena Castillo, no era conforme nada, ni la prensa ni el Congreso, no lo dejaron trabajar ni un minuto, cuando nombraba un ministro decían que todo estaba mal y censuraban al ministro. Al profesor Pedro Castillo no le dejaron trabajar, por eso la población de Puno está muy indignada.

Desde el gobierno, el ejecutivo presidido por Pedro Castillo se mostraba precario y desordenado. Más allá del obstruccionismo del Congreso, era evidente la dificultad del propio gobierno para concretar las medidas transformadoras prometidas en campaña que despertaban gran expectativa en la población. Temas como la nacionalización de los recursos naturales o la segunda reforma agraria se quedaron en el camino. Salvo en el sector laboral sindical, donde se promulgaron medidas favorables a los trabajadores, no hubo logros sustanciales que mostrar. El presidente no pudo armar el equipo técnico que llevara adelante sus propuestas ni tampoco consiguió cohesionar tras suyo una alianza político social que le permitiera enfrentar con más fuerza a sus opositores.

Presionado por la crisis, Castillo elegía sus cuadros pragmáticamente para sobrevivir y salvarse de la vacancia, concediendo cuotas de poder a funcionarios mediocres, políticos oportunistas e incluso a exadversarios políticos.⁴ La desconfianza de

4 Los casos más llamativos son el de Alejandro Salas, quien votó por Keiko en la segunda vuelta y fue nombrado ministro de Cultura, o el de Miguel Rodríguez Mackey, uno de los abogados que respaldó la teoría del fraude electoral y ejerció como canciller durante tres semanas

Castillo lo llevó a priorizar a familiares y allegados en puestos claves, varios de los cuales terminaron involucrados en casos de corrupción. Vale mencionar que Castillo tampoco pudo unificar y menos liderar un bloque de izquierdas, tarea en la que los partidos que lo respaldaron colaboraron poco y nada. El partido Perú Libre, que llevó al presidente en sus filas durante las elecciones, se encargó de alejar a los aliados de la izquierda progresista –“los caviares”, según su líder Vladimir Cerrón–, prefiriendo frecuentemente coincidir con el fujimorismo a pactar con el progresismo. Perú Libre tampoco pudo articular una correlación parlamentaria que diera sostenibilidad al gobierno; por el contrario, en un año perdió al 60% de su bancada y expulsó al mismo Castillo de sus filas, aunque nunca cedió su cuota en los ministerios. La izquierda progresista liderada por la excandidata presidencial Verónica Mendoza no tuvo un mejor desempeño. Tras decretar la “traición” de Castillo a escasos seis meses de gobierno, se sumó a la oposición, manteniendo un hipercriticismo más cercano al centro que pedía nuevas elecciones que al campo popular que mantenía el respaldo al presidente.

Tal situación de desorden en el gobierno y las dificultades para cohesionar el apoyo de los aliados fue vista por quienes respaldaban al presidente como algo reprochable, sí, pero entendible en

el contexto de asedio en que se encontraba. En los sectores populares y especialmente en las regiones del sur es recurrente escuchar que a Castillo “no lo dejaron gobernar” y ninguna fuerza política se destacó por apoyarlo. Así lo señala Virginia Quispe, dirigente del Mercado 12 de abril de Huamanga de Ayacucho

Lo positivo de nuestro presidente profesor Pedro Castillo es que él no se ha dejado comprar, él no entró por el dinero sino por ver por la igualdad, por trabajar por el campo. Lo que sí, creo un poco, se ha descuidado con su organización política y de repente por ese lado han aprovechado algunos (...). Había muchos problemas y todos lo atacaban: los periodistas, los congresistas, todo le criticaban, ni izquierda ni derecha lo dejaban gobernar.

Pero tan o más importante que analizar lo que no hizo el gobierno de Pedro Castillo es comprender lo que sí hizo, pues tal como se sostiene en este ensayo, lo actuado fue fundamental para la politización antagonista de los sectores subalternos, dispersos hasta entonces en episodios particulares de conflictividad social.

En primer lugar, en quince meses de gobierno se potenció el componente representativo identitario

de la democracia, ese factor igualador por el cual los ciudadanos valemos lo mismo. Desde 1980 cuando se implementó por primera vez el voto universal en el Perú, los peruanos excluidos de la República, los provincianos, los indígenas, los más empobrecidos no habían elegido presidente a uno de los suyos. Habían delegado el voto a candidatos que prometían cambios o expresaban rechazo al sistema como Toledo en 2000, Humala en 2011 o Mendoza en 2016, pero eran profesionales, con trayectorias en el extranjero más cercanas a lo limeño y cosmopolita que al bullente mundo urbano popular surgido de la cholificación y el neoliberalismo. Esta identificación se entroncaba además con el reclamo histórico de un proyecto nacional popular que, a la par que incluyera a las mayorías excluidas, andinas amazónicas y provincianas, devolviera el orgullo a un país asfixiado por la crisis. Salvo el gobierno de Velasco no existía en la memoria popular un gobierno con esas características y eso fue asumido medianamente por Castillo cuando anunciaba medidas alusivas al velasquismo como la “segunda reforma agraria” o la recuperación de la refinería de Talara. No era menor entonces que el presidente del pueblo cumpliera con ese requerimiento aparentemente básico de la democracia: dar voz, representación, identidad y orgullo a una comunidad política y especialmente, a quienes no la habían tenido.

En segundo lugar, el gobierno potenció el componente deliberativo de la democracia involucrando a los sujetos sociales en temas y espacios de casi exclusivo acceso a grupos de poder empresarial y políticos tradicionales. De un lado, Castillo abrió las puertas de Palacio de gobierno al país plebeyo emergente; sindicalistas, mineros informales, coccaleros, reservistas, cocineros, campesinos, mujeres indígenas, trabajadoras del hogar, microempresarios, entre otros, se reunían casi a diario con el presidente y sus ministros. El desfile de las delegaciones con sus trajes típicos por los salones de la lujosa casa de Pizarro era ya una respuesta importante a la herencia colonial y la oligarquía. Pero no se trataba solo de visitas, eran reuniones en las que se abordaban problemas, se cerraban acuerdos y los actores sociales tomaban la palabra remarcando la importancia de que por primera vez fueran atendidos y recibidos en el Palacio.

En paralelo, el gobierno organizó los denominados “gabinetes descentralizados” por los cuales Pedro Castillo, su premier Aníbal Torres y los demás ministros viajaban a las provincias y sesionaban junto a autoridades regionales, locales y organizaciones populares. En las sesiones el Ejecutivo rendía cuentas y enfrentaba las críticas incluso en contextos muy adversos como Huancayo, donde

el presidente se trasladó luego de una fuerte paralización regional. El gabinete descentralizado sesionó en el Coliseo Wanka y el pueblo concurrió a expresar sus críticas, pero también reconoció que era un presidente que daba la cara y los tomaba en cuenta. En las sesiones descentralizadas se asumían compromisos y sellaban acuerdos, aunque luego hubiera dificultades para monitorear los avances y el cumplimiento. Esta dinámica política que muchos catalogaron superficialmente como “populismo”, no solo alentaba el debate, también redistribuía el poder, lo sacaba de los espacios vetados al pueblo y a la vez metía al pueblo en esos lugares vetados. Si el neoliberalismo anula el componente deliberativo de la política, reservando cualquier discusión o solución a la tecnocracia y el mercado, el gobierno lo potenció abriendo debates que politizaron a los actores sociales de ese Perú precarizado, informal y también emergente y ciudadano.

En tercer lugar, el gobierno inició una democratización del aparato público incorporando a profesionales de provincias en la gestión. Profesionales de Chota, Chiclayo, Cusco y otras provincias ingresaron a trabajar en ministerios e instituciones públicas en Lima donde era habitual la contratación de profesionales limeños de universidades privadas. Si bien la mayoría de estos trabajadores

provincianos tenían las calificaciones y experiencia requerida, los grandes medios de comunicación amplificaban casos aislados para resaltar el copamiento del Estado por provincianos incompetentes y corruptos. Tal situación exacerbó el sentimiento de exclusión de las clases medias limeñas profesionales, incrementando sus críticas al gobierno. Pero, para los nuevos funcionarios, históricamente relegados de la burocracia nacional, trabajar en Lima era una oportunidad que solo otro provinciano como ellos podía darla y eso desataba la furia de los limeños. Como afirma Cristina, economista cajamarquina que pudo trabajar en la PCM:

Esa oportunidad nunca los de provincia la habíamos tenido y se dio porque el presidente era un provinciano como nosotros. Para trabajar en Lima tenías que ser de la Universidad Católica, estar bien recomendado... Nosotros hemos entrado y nos decían “son la banda de cajachos, la banda de chiclayanos, están destruyendo el Estado”. ¿Y por qué? Éramos tan profesionales como ellos y este también es nuestro Estado.

En suma, fueron quince meses de dura confrontación y ataques de la coalición golpista, que politizaron aceleradamente a sectores populares que desde hacía tiempo buscaban su propia representación

política. La incipiente redistribución del poder erosionó la herencia colonial e hizo visible el dominio de una minoría económica social y étnica, así como la postergación de amplios sectores de la sociedad ninguneados por su posición económica, origen étnico y territorial. No obstante, se hizo evidente que era posible alterar esa dominación bajo el liderazgo de uno de los suyos, que conociera sus penurias y no se dejara comprar por el adversario. Castillo nunca perdió el componente contestatario antisistema que lo llevó al poder, criticando y tomando distancia de unas élites que no querían verlo en Palacio, pues ese no era el lugar de un campesino. Para el país plebeyo movilizado desde diciembre, la postura del profesor evidenciaba que “nunca se vendió”. Por el contrario, fue fiel a su pueblo y les abrió los ojos sobre cómo funcionaba el poder. Esas son las palabras de Efraín Ramos, joven de 35 años, natural de Uripa, Apurímac y dirigente de la CONULP:

Yo agradezco bastante al presidente y a su premier, el doctor Aníbal Torres, porque son los únicos líderes que nos han hecho abrir los ojos, que nos han hecho ver la realidad, nos han mostrado cómo siempre han manejado el país. Porque más antes Ollanta era nuestra esperanza y se vendió (...). El gobierno del profesor no

se vendió y por eso lo empezaron a chancar la prensa, el Congreso, la derecha, los caviaras...

Al empezar diciembre del 2022, la tensión entre Ejecutivo y Legislativo seguía creciendo. En cada evento al que asistía el presidente o sus ministros, la población exigía el cierre del Congreso y avanzar en la nueva Constitución. Por su parte, en cada entrevista que concedían los congresistas de las bancadas de derecha o la Fiscal de la Nación, afirmaban que la destitución de Castillo era inminente. La primera cuestión de confianza que presentó el Ejecutivo ante el Congreso fue rápidamente desestimada. Se anunciaban nuevas movilizaciones y la disputa parecía pasar a un nuevo nivel de intensidad próximo al desenlace... Y algo así ocurriría el 7 de diciembre.

Como se afirmó al inicio, volviendo a Gramsci (2000), durante los momentos de antagonismo el actor identifica qué es lo que lo diferencia y contrapone a los poderes dominantes, logrando sobreponearse a las inercias propias de la dominación, organizando el desacuerdo y pasando al estallido; es ahí donde mejor se desenvuelve. En Perú, el tránsito de una conflictividad social, propia de una subalternidad históricamente sedimentada, al antagonismo político que identifica un nosotros y un adversario, discurrió entre la imposición del neoliberalismo y

se aceleró con la pandemia primero y el gobierno de Castillo después. Tras la destitución del “presidente del pueblo”, el estallido antagonista tomaría protagonismo con una fuerza impugnadora de doscientos años.

“No es el 7 de diciembre, son 200 años”. Rostros y reclamos del estallido

El miércoles 7 de diciembre de 2022 se anunciaba como un día intenso. Durante la tarde, Pedro Castillo debía enfrentar su tercera moción de vacancia. Como ocurría ya en cada juicio político, organizaciones sociales en contra de la vacancia presidencial se concentraban en la Plaza San Martín, mientras los grupos de derecha a favor se reunían a pocas cuadras en Paseo de los Héroes. Pero al medio día un inesperado mensaje presidencial, alteró el curso de los acontecimientos. En el anuncio Castillo manifestaba que

[e]n atención al reclamo ciudadano en lo alto y ancho del país, tomamos la decisión de establecer un gobierno de excepción, a restablecer el Estado de derecho y la democracia, a cuyo efecto se dictan las siguientes medidas: disol-

ver temporalmente el Congreso de la República e instaurar un gobierno de emergencia; convocar, en el más breve plazo, elecciones para un nuevo Congreso con facultades constituyentes para elaborar una nueva Constitución (*Agencia Andina, 2022*).

Ciertamente, el mensaje del presidente no era un rayo en cielo sereno destinado a interrumpir una saludable democracia. Era más bien la respuesta desesperada a una legalidad previamente maniataada y acomodada a medida de los grupos de poder que luego de un asedio permanente, estaban a punto de cesar a Castillo. Sin embargo, la situación era confusa. Para las bancadas de derecha, la fiscalía y los grandes medios, estábamos ante un golpe de Estado que finalmente demostraba la vena autoritaria del gobierno comunista. Para quienes respaldaban a Castillo, y para buena parte de la población que rechazaba al Congreso, el anuncio del presidente atendía a sus reclamos. Lo que no quedaba claro era si el presidente contaba con los respaldos necesarios para implementar los anuncios y si lo actuado concordaba con el decadente pero todavía vigente marco jurídico. Testimonios como el de Gloria, dirigente quechua chopka de Huancavelica, resaltan esa ambivalencia; la alegría al oír el mensaje seguida por la preocupación:

Nos sorprendió el discurso, cuando me dicen Castillo ha cerrado el Congreso fue una alegría. “¡Por fin!”, dijimos varios aquí *en el mercado*, está cumpliendo lo que le hemos pedido... Pero al ratito empezamos rápido a preocuparnos y pensar qué iba a pasar: “¿tendrá el apoyo de los militares, lo apoyará la policía?”

La pregunta de Gloria y muchos peruanos fue resuelta pocas horas después de leído el mensaje presidencial: Castillo no tenía el respaldo de las fuerzas armadas y policiales y fue arrestado por su propia escolta siendo todavía presidente. Casi en paralelo, el Congreso votó una nueva moción de vacancia vulnerando su propio reglamento y cometiendo un hecho claramente ilícito.⁵ Cerrando la jornada, la hasta entonces vicepresidenta Dina Boluarte juramentaba como nueva presidenta del Perú.

El mismo miércoles 7 en la tarde y todo el 8 de diciembre, numerosas delegaciones se congregaron

5 Según lo anotado por el artículo 89-Ac del Reglamento del Congreso, la vacancia inmediata del presidente de la República requiere de procedimientos formales tales como presentar una moción debidamente sustentada y contar con el voto de 107 congresistas sobre el total de 130. El 7 de diciembre no se presentó la moción y votaron a favor de la vacancia 101 congresistas.

en la Plaza San Martín expresando su rechazo a la destitución presidencial. En medio de la indignación y la tristeza, centenares de personas, en su mayoría maestros y campesinos, se desplazaban a la Dirección de Operaciones Especiales (DIROES) donde Pedro Castillo se encontraba detenido. La prensa no cubría estas protestas y enfocaba sus reflectores en Boluarte y sus reuniones con políticos y diplomáticos. El Ejecutivo se empeñaba en mostrar normalidad, pero era imposible ocultar la tensa calma. Vía *Facebook* y grupos de *WhatsApp*, en prácticamente todas las regiones se anunciaban paros y movilizaciones para el 10 y 11 de diciembre.

Efectivamente, desde el 10 de diciembre de 2022 y hasta la quincena de marzo de 2023, Perú viviría la movilización popular andino amazónica, indígena y rural, más grande de las últimas décadas, quizá comparable a las luchas por la tierra que precedieron a la reforma agraria la década del sesenta. El pueblo se volcó a las calles negándose a asumir que su voto, ese resquicio de poder que aparentemente tenían, no valía nada. La politización antagonista generada los últimos dos años –influenciada por la pandemia, las elecciones y el gobierno de Castillo– se expresaba en un gran estallido. Si los adversarios se imponían en el poder con maniobras parlamentarias, operativos mediáticos y un brutal uso de la fuerza, ellos, el pueblo, se movilizaban

defendiendo su derecho a existir como ciudadanos, condición que consideraban les había sido negada los doscientos años de República.

Las primeras protestas masivas empezaron el 10 de diciembre en todo el país y con especial fuerza en el sur andino. Ese día, el Frente de Defensa y Desarrollo de Apurímac (tierra natal de Dina Boluarte) protagonizó una movilización que fue acatada principalmente en las provincias de Andahuaylas y Chincheros. Lo mismo hicieron los mineros informales de Chala en Arequipa y el Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho. En la selva central se bloquearon las carreteras de Pichanaki, en Cajamarca se quemaron imágenes de Dina y en Ica se registraron bloqueos a lo largo de la carretera Panamericana Sur. A escasos cinco días de instalado el nuevo gobierno, la Defensoría del Pueblo registró siete personas asesinadas en las protestas, todas por impacto de proyectiles policiales, cinco en Apurímac y dos en Arequipa, incluyendo dos menores de edad.

Ante la masividad y beligerancia de las manifestaciones, el 12 de diciembre Dina Boluarte anunció que presentaría un proyecto de adelanto de elecciones al Congreso y declaró el estado de emergencia, autorizando a las fuerzas armadas y policiales a reprimir a los “terroristas” que se movilizan azuzados por Pedro Castillo. Lejos de tranquilizar, el

mensaje avivó la indignación. Se realizaron nuevas protestas en el sur andino y también en ciudades como Chota en Cajamarca, Ayabaca en Piura y zonas de agroexportación como Viru y Chao en La Libertad. En el centro se movilizaban en Huancayo, Huancavelica, además de los cocalleros del VRAE que se congregaban en las ciudades intermedias. En Ica, cuatro horas al sur de Lima, se mantenían bloqueados varios kilómetros de la carretera Panamericana Sur, vía fundamental para la economía nacional. El 15 de diciembre se acató el Paro Regional en Ayacucho: miles de ciudadanos especialmente maestros, campesinos agrupados en las Juntas de regantes, comerciantes, universitarios y moto-taxistas llegaron a la Plaza de Armas y se desplazaron a diversos puntos incluyendo el aeropuerto. El gobierno ordenó que el ejército reprimiera la manifestación y el saldo fue una sangrienta jornada con cientos de heridos, detenidos y diez peruanos asesinados por balas militares.

Esa misma semana, con más del 60% del país convulsionado por las protestas, el Congreso aprobó en primera votación el proyecto de adelanto de elecciones. Por su parte, la población inició el año 2023 con nuevas y masivas manifestaciones. El 9 de enero la contundente movilización en Juliaca fue respondida con una brutal arremetida policial que dejó como saldo dieciocho personas asesinadas incluyendo un

médico y dos menores de edad. Pese a la represión, la movilización no disminuía: por el contrario, miles de ciudadanos en todo el país se trasladaban a Lima para hacer valer su protesta. Durante los tres meses de verano costeño, delegaciones de prácticamente todas las provincias del sur y otras regiones del centro y norte llegaron a la capital protagonizando marchas y enfrentamientos con la policía.

Pero si la población resistía en las calles, los grupos de poder que respaldaban al nuevo gobierno tenían claro que no entregarían la presidencia y desplegaron una estrategia de desgaste basada en la represión y la criminalización. La coalición golpista actuaba ahora como una coalición restauradora decidida a controlar todo el Estado y otorgar un nuevo aire al deteriorado modelo neoliberal. Más allá de la diversidad de intereses, las acciones de estos grupos eran eficaces y concurrentes: el Ejecutivo ordenaba la represión, la Fiscalía abría proceso penal a los manifestantes, los medios emitían afiebrados reportajes sobre la infiltración terrorista y el Congreso rechazaba el adelanto de elecciones en segunda votación.

Para finales de marzo, la brutalidad militar y policial, así como la judicialización que encarceló a numerosos dirigentes, hizo mella en el pueblo movilizado. El estallido había decaído y las delegaciones volvían a sus regiones, procesando

los acontecimientos. El decidido apoyo de Keiko Fujimori y los grupos de ultraderecha otorgaron a Boluarte un respiro. Las graves violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad cometidos estos cuatro meses fueron reseñados en sendos informes de organismos no gubernamentales como Amnistía Internacional o *Human Rights Watch* e instancias internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En su gran mayoría, la comunidad internacional también avaló al nuevo gobierno, con las honrosas excepciones de Colombia, México, Bolivia, Argentina, Honduras y los países del ALBA.

Este primer ciclo de protesta configura un verdadero estallido social, no solo por su carácter súbito, masividad y beligerancia, sino también por su alcance nacional y su capacidad de transgredir el orden establecido desbordando largamente estructuras organizativas, como sindicatos y partidos. El estallido peruano evidenció el protagonismo de un nuevo sujeto popular politizado en clave antagonista, decidido a defender un *nosotros* compartido frente a un adversario de dimensiones históricas que sistemáticamente lo ha excluido del poder. Es relevante entonces analizar quiénes componen este nosotros movilizado, abordando sus principales características y las demandas que plantean al Estado y la sociedad.

El país plebeyo: el sujeto de la movilización

¿Quiénes son las personas que salieron a las calles en las protestas? ¿De dónde venían, cómo vivían, qué intereses compartían? Estas preguntas fueron y son recurrentes entre la prensa, la intelectualidad y la clase política. Tal como ocurrió en las elecciones del 2021, cuando desconocían quién era Pedro Castillo y por qué pasaba a la segunda vuelta, ahora tampoco tenían idea de quiénes eran estas personas que tomaban carreteras y aeropuertos, se desplazaban en camiones para protestar en Lima, soportaban gases y arriesgaban la vida cuestionando la democracia existente.

Una respuesta inicial vino del Poder Ejecutivo y fue secundada por la coalición de gobierno. Al registrarse los primeros muertos, Dina Boluarte, flanqueada por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, afirmó que las protestas eran protagonizadas por terroristas coordinados por Pedro Castillo desde la cárcel. Días después, en su visita al Hospital Policial donde algunos efectivos se recuperaban de contusiones, reafirmó esta línea señalando que “esto no es protesta, esto es terrorismo financiado por el narcotráfico”. Durante todo el período de protestas,

esa fue la principal línea argumentativa del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial: los manifestantes eran terroristas azuzados por Pedro Castillo con cuantioso financiamiento ilícito. Pero, conforme la movilización incrementaba su magnitud y la prensa alternativa e internacional daba voz a los manifestantes, la mentira se desmoronaba. No eran terroristas, no estaban armados, no recibían dinero ilegal, no querían destruir el Estado.

¿Quiénes eran entonces los que se movilizaban? ¿Cómo definir al sujeto de la movilización? Volviendo a García Linera (2015), puede identificarse un sujeto plebeyo que emerge de la experiencia compartida de dominación y asume los contornos de una sociedad abigarrada y multiforme donde la condición de clase convive con formas comunitarias. Quienes participaron activamente del estallido conforman este Perú plebeyo configurado por las condiciones económicas de informalidad, precariedad y exclusión que genera el neoliberalismo. Son los sectores históricamente subordinados de la sociedad política debido a la herencia colonial y la permanente crisis de representación. Son hijos y nietos de la reforma agraria, en su gran mayoría de origen indígena quechua, aimara o amazónico que se abren paso en las ciudades. Son adultos jóvenes que viven el día a día como moto-taxistas, cocaleros, mineros informales, jornaleros de la

agroindustria, pero también microempresarios emergentes. Muchos son jóvenes primera generación de universitarios, y mujeres que asumen protagonismo encabezando las protestas sin dejar de atender a sus hijos.

Este sujeto colectivo, desconfía instintivamente de la clase política de todas las ideologías. Se identificaron con Castillo porque era del pueblo *como ellos* y por lo tanto conocía sus problemas, no importaba si se equivocaba en el intento, tal como lo hicieron todos los otros presidentes que ellos no eligieron y sí pudieron gobernar. La gran mayoría carece de una trayectoria político-partidaria, pero participó anteriormente en episodios de conflictividad social y, al ser reprimida con violencia, politizó su experiencia vital. Forman parte además de diversos espacios de agremiación local y laboral, tales como asociaciones de transportistas, comerciantes o juntas de riego agrario. Es, en suma, “el pueblo”, los de abajo, el país plebeyo que emerge en clave antagonista.

Para abordar más en detalle las características de este sujeto popular movilizado, esbozamos aquí algunas ideas atendiendo a los testimonios que brindaron los dirigentes para este ensayo, así como a lo reseñado por los medios de comunicación y los partes judiciales sobre los cientos de detenidos, heridos y asesinados que dejaron las protestas.

En primer lugar, resalta la posición económica de los manifestantes y más concretamente sus trayectorias en el ámbito laboral y productivo. Por los ingresos económicos reseñados estadísticamente, puede hablarse de los sectores empobrecidos que sobreviven con algo más que el sueldo mínimo (INEI, 2022). En específico, se trata de los sectores empleados en la economía informal –el 70% de la PEA–, particularmente dinámica en las capitales regionales y provincias del sur andino, epicentro de las protestas (Ayacucho, Apurímac, Cusco, Arequipa y Puno; puede extenderse al centro: Junín y Huancavelica y a los Andes norte en Cajamarca) Se trata de actividades económicas liberalizadas por el ajuste estructural de los noventa, como el transporte público urbano e interprovincial que incluye choferes de colectivos, de moto-taxis y motos lineales. Este sector se encuentra organizado y frecuentemente se ha opuesto al control estatal, pese a los accidentes que suele provocar. El testimonio de Eduardo Rivas de Apurímac es muy representativo de estos adultos jóvenes que crecieron con el neoliberalismo y que toda su vida han trabajado en la informalidad:

Yo soy natural de Uripa y tengo 35 años, mis padres son quechua hablantes y yo también. Al terminar mi secundaria, me fui a vivir a Cusco, me puse a trabajar en lo que había, he trabaja-

do en construcción civil, he sido cobrador de combi, chofer de microbús, he alquilado moto-taxi. Hace diez años volví a mi pueblo, me casé y tengo dos hijas, manejo colectivo la ruta Uripa-Ayacucho. Personalmente, nunca he formado parte de ningún partido político, pero, como todos los luchadores, en el fondo pertenecemos a un partido, nos debemos al pueblo.

Se suman también los campesinos de las comunidades andinas o pequeños propietarios que trabajan la tierra y dependen de la venta de sus cosechas, así como los comerciantes de mercados de las ciudades intermedias agrupados en asociaciones junto a los trabajadores del sector servicios, como restaurantes y puestos de comida.

Otro ámbito fundamental en el que trabaja este pueblo movilizado es el de las economías ilícitas. Los productores de hoja de coca del VRAE fueron un bastión electoral de Castillo y uno de los primeros grupos en movilizarse a Lima durante las protestas de diciembre, acampando por varias semanas en la Plaza Manco Cápac. Los trabajadores de la minería informal que tuvieron una mesa de diálogo en el gobierno de Castillo y se reunieron varias veces en Palacio de gobierno, fueron otro sector muy activo durante el estallido, especialmente en Arequipa, Pasco, Moquegua y Madre de Dios.

Se cuentan también los peones y jornaleros de la agroexportación, un sector que se expandió desde fines de los noventa gracias a un régimen laboral especial que facilitó su crecimiento en pésimas condiciones para los trabajadores y acaparando tierras en los valles costeros. Esa es la realidad del Valle de Chao en la provincia de Virú en La Libertad, al norte del país, donde la protesta fue intensa y dejó dos asesinados por balas policiales y cientos de heridos y judicializados, muchos de ellos trabajadores de las empresas agroexportadoras Camposol y Hortifrut. La misma situación se vivió en Ica, donde han proliferado las agroexportadoras de arándanos, paltas y nueces, entre otras frutas y legumbres. Los trabajadores de este sector, que habitan zonas conocidas, como Barrio Chino y Expansión urbana (ubicadas a la altura del kilómetro 250 de la Panamericana Sur), bloquearon la carretera desde el inicio de las protestas. Varias semanas después, en una acción coordinada, bandas armadas contratadas por las empresas repelieron a los manifestantes, mientras el ejército allanaba las viviendas deteniendo a decenas de jóvenes.

Vale remarcar que este sujeto colectivo movilizado no incluye solo a los más empobrecidos y precarizados, también se cuentan sectores emergentes como profesionales y sobre todo microempresarios (mecánicos, dueños de empresas de taxis,

de panaderías) y otros de la pequeña burguesía provinciana que se identifican más con su entorno que con la clase media limeña, la cual por lo demás no los acepta como iguales. Este grupo fue fundamental en provincias como Juliaca, Ilave, Uripa y Andahuaylas para apoyar el traslado de los manifestantes que viajaron a Lima con donaciones de dinero, alimentos o incluso poniendo buses a disposición.

Un segundo elemento fundamental es la etnicidad, asociada al origen andino quechua o aimara y en menor medida amazónico, de quienes se movilizan. Según el Censo del 2017, cerca del 28% de los peruanos y peruanas se identifica como perteneciente a un pueblo indígena u originario, y más de cuatro millones de peruanos tiene como lengua materna el quechua, el aimara o alguna lengua amazónica. Esta cifra se incrementa en el centro y sur andino, donde tuvo lugar el epicentro de la protesta. En regiones como Apurímac, Ayacucho, Cusco o Huancavelica más del 60% de la población declara el quechua como su lengua materna. En el caso de Puno el 43% se reconoce de origen quechua y el 30% aimara (INEI, 2017). También en la selva central, Bagua, Pucallpa y otras provincias amazónicas es importante la presencia de población indígena ahsaninka y awajum. Después de siglos de discriminación y desprecio, estos peruanos

rechazan la discriminación y revaloran su identidad ancestral; no son solo indígenas u originarios, son pueblos incas o preincas con historia, lengua y tradición de lucha, como es el caso de los Chankas, cultura que floreció en Apurímac. En esa línea va lo afirmado por Dionisia, madre de cinco hijos que brinda su testimonio en quechua:

Yo tengo 50 años, soy dirigente aquí en la comunidad de Huancabamaba, distrito José María Arguedas, provincia de Andahuaylas. Yo he ido a la escuela primaria, mi abuelo fue beneficiario de la reforma agraria en tiempos de Velasco. Aquí todos hablamos nuestro quechua, tenemos nuestras costumbres, en Lima se burlan: “indias”, nos dicen, “indias sucias”, insultan. No, no somos indias, somos chankas, somos inkas, somos pueblos grandes, valientes.

Este Perú indígena y originario, históricamente excluido, expresó abiertamente su identidad étnica durante el estallido poniendo en evidencia la vitalidad de las identidades étnicas en términos de cultura, vínculos sociales y formas de reciprocidad que exceden la lógica del capital. Las asambleas se desarrollaron básicamente en quechua o aimara, en las marchas flamearon símbolos prehispánicos como la wiphala, en la organización de recursos era

fundamental la reciprocidad del ayni y la minka. Fue crucial también el rol que cumplieron las autoridades originarias, alcaldes, varayocs o tenientes gobernadores que orientaron la movilización.

Según el informe de la CIDH, el 80% de las personas asesinadas en las protestas eran de origen indígena y ellos o sus padres hablaban quechua o aimara. Son estos quechuas, chankas, chopkas, aimaras originarios del Perú andino quienes votaron mayoritariamente por Castillo y salieron a las calles pese al estado de emergencia, protestando contra lo que consideran una usurpación y el robo de sus votos. Protestaron porque lograron poner a uno de los suyos en el gobierno, y los poderes en Lima lo boicotearon y humillaron. Como afirma Carmen, no van a reconocer ni respetar a una presidenta que consideran una traidora, que “habla quechua igual que los hacendados, para mandar mejor a sus pongos”.

Un tercer elemento característico de los manifestantes tiene que ver con la presencia de un sector profesionalizado pero que no pierde su identidad étnica y popular. Una parte importante de los que se movilizan, especialmente los más jóvenes, han logrado acceder a educación superior, técnica o universitaria. Muchos son la primera generación de universitarios, que pueden estudiar una profesión gracias a la masificación que supuso

la proliferación de universidades de bajo costo en las provincias. A fines de los noventa, la liberalización de la educación que trajo el neoliberalismo supuso la instalación de universidades privadas de mala calidad pero baratas y de fácil acceso, pues no requieren el examen de admisión que sí exigen las universidades públicas. Con mucho sacrificio, familias campesinas y de los sectores informales pagan las pensiones y se aseguran de que sus hijos tengan una carrera. Los estudiantes no se dedican exclusivamente a la universidad, generalmente también trabajan en la chacra o en algún empleo temporal durante las vacaciones. Los estudios y la profesionalización otorgan respeto en la familia y la comunidad y abren una vía de ascenso social sin negar ni renunciar a su identidad. Sobre el tema, es representativo el testimonio de Daysi Vilca, joven manifestante que se trasladó a Lima a protestar junto a cientos de estudiantes universitarios de su región:

Soy de Ilave, tengo 29 años y he estudiado administración de negocios internacionales en la Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez de Juliaca. Soy la primera que voy a la universidad en mi familia, mi papá es mecánico, mi mamá es ama de casa, casi no tienen estudios. En Lima nos han dicho de todo, hasta anima-

les; somos universitarios, somos aimaras, es nuestra cultura, no tenemos vergüenza

Destaca también la presencia de maestros, en especial los vinculados al FENATE, sindicato fundado por Pedro Castillo. Junto a ellos, docentes universitarios y otros profesionales de las provincias más convulsionadas, se sumaron a las protestas, teniendo activa participación, especialmente en las asambleas de discusión y evaluación, donde sus opiniones fueron bastante escuchadas. Vale resaltar la presencia de artistas populares y colectivos culturales, como músicos, grupos de teatro, cantantes y estudiantes de arte. La banda aimara de Puno que compuso la canción “Esta democracia ya no es democracia” (2022) posicionó el himno de las protestas, acompañando las marchas y los carnavales junto a muchas otras canciones de carácter regional. Destacan también las acciones teatrales de artistas y escuelas locales que surgieron en todo el epicentro del estallido, aportando creatividad, dinamismo y lo que ellos denominan “concientización”. Con estas expresiones, el estallido reveló una disputa por la hegemonía cultural desde los ritmos andinos y la creación artística provinciana.

En cuarto lugar, es importante destacar las trayectorias político-organizativas de muchos de los participantes. De un lado, la gran mayoría no ha

tenido experiencia político-partidaria. Como buena parte del país, desconfían de los partidos a los que, más allá de su ideología, consideran como parte de una misma clase política que se aprovecha del pueblo. Lo que sí reconocen es un voto sistemático hacia opciones que, como mencionan, “ofrecían un cambio”. El problema es que, luego, se sienten olvidados o traicionados por esos políticos y prima la desconfianza. Así lo expresa Elder, cocalero de Pichari en el Río Apurímac:

Los partidos son lo mismo, nunca he participado en ninguno, he votado sí pues por los que decían “vamos a cambiar, vamos a tener nueva Constitución”. Hemos votado por Humala dos veces, por la florcita una vez, pero nada, ellos son políticos que se venden, hacen lo mismo, nadie quiere saber nada con ellos.

Por otro lado, una buena parte de los manifestantes del estallido participaron anteriormente en episodios de conflictividad social en sus regiones. En las zonas de conflicto socioambiental, muchos de ellos fueron parte de las luchas contra la expansión del capital minero o petrolero. Es el caso de Apurímac, donde muchos comuneros se movilizaron anteriormente en la disputa con la minera Las Bambas o en Cajamarca, donde el mismo Pedro

Castillo participó junto a las rondas campesinas en las protestas contra la minera Conga. Es el caso también de los trabajadores de la agroexportación, que se movilizaron en La Libertad (Virú) e Ica, muchos de los cuales habían participado en el Paro Agrario del 2020, violentamente reprimido por el gobierno de Sagasti con el saldo de dos asesinados por la policía. Lo mismo ocurrió con los campesinos de Ayacucho, Huancavelica y Apurímac, que en número importante habían participado ya en el Paro Agrario por los precios de la papa en 2018. Estas trayectorias dan cuenta de un proceso acumulativo de confrontación con el Estado, con las fuerzas represivas, con los poderes económicos y mediáticos que caló en la conciencia política de los actores, orientando el tránsito de la subalternidad al antagonismo.

Finalmente, vale destacar la participación de actores tradicionales del sector de movimientos sociales peruano, como la CGTP, y los gremios, como Construcción Civil o el mismo SUTEP. Sin embargo, durante el estallido son ampliamente rebasados por el sujeto plebeyo provinciano emergente, que es el protagonista indiscutible y que incluso cuestiona a estos actores por su actitud hipercrítica frente al gobierno de Pedro Castillo y su escasa combatividad ante la represión de Boluarte. Las discusiones, de un lado, en quechua y, del otro, en

español, y las marchas en Lima, unas conducidas por estos gremios con destino a Miraflores y otras al Congreso encabezadas por los provincianos, son representativas de las brechas presentes en la sociedad peruana, latentes en las protestas contra un adversario común.

Un reclamo de doscientos años: demandas de la movilización

Durante el estallido, los sectores movilizados levantaron una plataforma de demandas muy cohesionada, inscrita en un marco de reivindicaciones históricas explícitamente enunciadas. ¿Qué pedían estas masas movilizadas? En síntesis, reclamaban la renuncia de Dina Boluarte, el cierre del Congreso, una nueva Constitución y la libertad de Pedro Castillo (un sector también demandaba su restitución). Para el Ejecutivo comandado por Dina Boluarte, tales demandas evidenciaban una clara manipulación de Castillo y sus partidarios pues, como afirmó en el mensaje a la nación del 20 de enero del 2023, “eso no le corresponde pedir al pueblo, ¿por qué no piden soluciones de agua, salud, educación, agricultura, puentes y carreteras, que

los niños empiecen en marzo con Internet?”. En la misma línea, los poderes del Estado y los medios de comunicación tacharon las demandas ciudadanas de “politiqueras”, propias de terroristas y/o digitadas por Evo Morales desde el altiplano.

En un país acostumbrado a periodos de conflictividad social donde los subalternos se movilizaban básicamente por pedidos economicistas y sectoriales, el hecho de que las masas irrumpieran con ánimo antagonista impugnando al sistema político y al orden histórico establecido, era algo nuevo e incluso desconcertante para los grupos de poder. No es de extrañar entonces que apelaran a la manipulación, la infiltración terrorista o la influencia extranjera. Pero detrás de la plataforma unificada de lucha, se expresaba un nuevo momento de acumulación política de los sectores populares. Pasemos a abordar con más detalle la agenda de reclamos presentes en las protestas a partir de las afirmaciones de sus protagonistas.

La principal demanda de las protestas, la que brindaba mayor cohesión y generaba más consenso, era el pedido de renuncia de Dina Boluarte. Desde el primer día, a nivel nacional, la población movilizada exigía la salida de la nueva presidenta. Dos factores fueron fundamentales en este pedido de renuncia: uno, el rechazo a la traición y usurpación que encarnaba, y, dos, la indignación ante el

asesinato de decenas de compatriotas que ordenó para mantenerse en el cargo. El primer factor era clarísimo, Dina Boluarte había traicionado su palabra, pues el 7 de diciembre de 2021, a pocos días de votarse la primera moción de vacancia presidencial, en un concurrido acto público en la plaza de armas de Juliaca pronunció: “Mi lealtad con el presidente Castillo es a prueba de balas, si al presidente lo vacan yo me voy con el presidente”. En diciembre de 2022 el presidente había sido vacado y detenido y ella, lejos de renunciar, había pactado con quienes boicotearon y conspiraron contra Pedro Castillo. Pero Boluarte no solo traicionaba al pueblo, estaba usurpando un cargo para el cual la gente no la había elegido. Aunque se amparaba en la sucesión constitucional, la gente tenía claro que votaron por Castillo para presidir el país y no por ella. Si la ilegalidad podía ser discutible, la ilegitimidad era inobjetable. En un país donde la gran mayoría de la población identifica la política tradicional con mentiras y componendas, la traición y usurpación de la cual era víctima Castillo les afectaba directamente y por lo tanto les indignaba doblemente. En esa línea van las palabras de Martha, dirigente campesina de la región Puno:

Ella aquí en la Plaza de Juliaca, lo dijo frente a todos nosotros: “si vacan a Castillo yo me voy

con el presidente”. ¿Lo han vacado y qué ha hecho? Ha traicionado, ha usurpado, se ha besado con los congresistas que nos han despreciado. Mentirosa es, usurpadora, asesina.

De otro lado, la brutal represión desatada contra los manifestantes, que en tan solo dos meses asesinó medio centenar de personas incluyendo seis menores de edad, avivó más la indignación y el rechazo a Dina Boluarte. A ello abonaba la agresividad de la presidenta cada vez que declaraba, afirmando que los asesinados y heridos eran terroristas. La violencia además evocaba lo peor del conflicto armado que vivió el Perú entre 1980 y 2000, particularmente intenso en zonas como Ayacucho y Apurímac, donde se registró la mayor afectación por parte de Sendero Luminoso y las Fuerzas Armadas. El hecho que Boluarte enviara al ejército a patrullar y disparar a los manifestantes en la ciudad de Huamanga, fue recibido como un acto cruel, peor todavía viniendo de una mujer, madre y provinciana que conocía esa historia. Así lo comenta Pastor, comerciante de Huamanga:

Dina ahorita nos está mandando el ejército como antes ha sido en los ochenta. ¿Qué nosotros no tenemos derecho? Según la Constitución tenemos derecho de hacer nuestra protes-

ta y entonces por qué nos dispara. Queremos que se vaya esa traidora, que responda por todos los peruanos que han matado, parece que no tiene hijos... La justicia va a llegar y yo como ayacuchano voy a luchar para que se vaya directo a la cárcel.

El segundo punto en la plataforma era la demanda de cierre del Congreso, un pedido que expresaba el rechazo acumulado hacia la clase política. Vale remarcar que este poder del Estado es, cada vez más, percibido por buena parte de la población como el *locus* donde se ubica lo peor de la política peruana, el lugar donde todo se compra, todo se vende y reina la impunidad. Tal deterioro del Congreso ante los ojos de la ciudadanía remite a una larga crisis de representación, incluyendo un mediocre sistema de partidos, congresistas caudillescos y bancadas clientelares que llegan al parlamento a concretar negocios y se olvidan de sus electores. No es nada nuevo, pero el deterioro se agravó desde 2016 con la crisis e inestabilidad que trajo la hiper-mayoría del fujimorismo y la acumulación de facultades que alteró el equilibrio de poderes. El rechazo de la población a los congresistas llevó a que el cierre del Congreso realizado por el entonces presidente Martín Vizcarra en 2019 fuera mayoritariamente aplaudido.

Para 2021 la beligerancia y agresividad que asumió la mayoría del Congreso contra el gobierno de Pedro Castillo agudizó el rechazo tanto del núcleo duro de partidarios del presidente como de buena parte de la población, que veía una clara orientación obstruccionista y hasta golpista. Las constantes censuras a los ministros, mociones de vacancia, negativa de permisos para viajes al exterior, desprecio y humillación al presidente Castillo, contrastaban con los beneficios y privilegios que los parlamentarios exhibían, tales como la coordinación de Comisiones especiales con personal de confianza, los viajes al exterior o los cuantiosos bonos para sus trabajadores. Según la encuestadora Datum, la semana del 7 de diciembre de 2022, la aprobación de Castillo alcanzaba el 25%, mientras que la del Congreso arañaba el 10%. Que la clase política, y en especial el fujimorismo, se hubiera salido con la suya al destituir a Castillo indignó a la población, agravando el hecho de que congresistas de izquierda y de derecha votaran a favor de una vacancia cuestionada incluso procedimentalmente, destituyendo al presidente electo y juramentando a la nueva mandataria en apenas un par de horas. Durante las protestas, el reclamo de cerrar el Congreso fue unánime, este poder debía ser renovado por una Asamblea Constituyente

Justamente, el tercer punto de la plataforma de demandas levantada por el estallido era una nueva Constitución escrita por una Asamblea Constituyente. Esta demanda tampoco era nueva, por el contrario, había ganado fuerza los últimos años conforme la crisis política y económica se agudizaba. Vale resaltar que la Constitución vigente fue aprobada en 1993 durante la dictadura de Alberto Fujimori, en un contexto de represión, criminalización, ausencia de independencia de poderes y falta de garantías para el debate público. En el Congreso Constituyente Democrático (CCD) que escribió esa carta magna, la derecha peruana estuvo sobrerrepresentada, culminando en un texto que garantiza la primacía del libre mercado y define al Estado como promotor de la inversión privada anulando su rol garante de derechos. El referéndum de 1993, que debía refrendar la propuesta de Constitución del CCD, reveló el enorme rechazo a esta propuesta pues en regiones del sur como Puno o Cusco el No a la constitución llegó al 80% (ONPE, 2023). En general, los resultados expresaban ya una impugnación de origen, por ser impuesta por la dictadura, por su carácter anti derechos y por su escasa deliberación y consenso.

El 2001 la caída de Alberto Fujimori no significó un cambio del régimen constitucional pues las principales fuerzas políticas pactaron mantener

este orden. Lo paradójico fue que mientras la clase política negaba el cambio de Constitución con participación de la ciudadanía en una Asamblea Constituyente, desde el Congreso cambiaban la Constitución a discreción, en particular aquellos puntos que favorecieran a los grupos de poder económico. El rechazo a la Constitución del 93 se asociaba además a puntos sustanciales del modelo neoliberal como el manejo de los recursos naturales, los “contratos ley” y los regímenes de exoneración especial a la agroexportación, las mineras y petroleras. En la pandemia, se incrementó el rechazo a la Constitución, pues el Estado desprotegió al ciudadano permitiendo que clínicas privadas y especuladores de oxígeno acumularan ganancias a costa de la enfermedad y la muerte de miles de peruanos.

Finalmente, además del rechazo a su origen ilegítimo producto de una dictadura y al corte programático totalmente pro libre mercado, el rechazo a la Constitución del 93 expresa también el reclamo contra una exclusión histórica. Como bien afirman las y los dirigentes de la protesta, los pueblos originarios nunca participaron en la elaboración de las Constituciones que ha tenido el Perú. Para los manifestantes, uno de los puntos claves que los llevó a votar por Pedro Castillo fue justamente abrir paso a una Asamblea Constituyente plurinacional,

pero el Congreso lo impidió archivando el Proyecto de Ley presentado y poniendo nuevas barreras. En suma, el pedido de una nueva constitución es una demanda de forma y fondo, política, programática y representativa a la vez. Así lo plantea Martín, dirigente de Andahuaylas:

Necesitamos la nueva constitución esa es la demanda fundamental, Fujimori ha hecho la Constitución a la medida de sus amigos, de los poderosos (...). Lo que queremos es escribir nosotros en la Asamblea Constituyente nuestra propia Constitución, ahí habrá un representante de cada pueblo originario junto a otros grupos y definiremos cómo se van a usar nuestras riquezas porque ahora todo se remata a las transnacionales.

Por último, la cuarta demanda de la plataforma, muy presente los primeros meses del estallido, es el reclamo de libertad al presidente Pedro Castillo. Para su núcleo duro de partidarios, e incluso para buena parte de la población, la detención violenta del presidente por su propia escolta cuando todavía estaba en funciones es percibida como un acto de ensañamiento y maltrato por parte de una élite que siempre lo despreció. La veloz destitución presidencial, la apurada juramentación de Boluarte,

el apresamiento de Castillo y la persecución a su familia, son vistos con rechazo, sobre todo si se compara con el trato privilegiado que reciben ex-presidentes como Kuczynsky, con prisión domiciliaria en su mansión del exclusivo distrito de San Isidro. Estos hechos refuerzan la solidaridad con el presidente, al cual maltratan por ser del pueblo como ellos. Conforme se desarrollaron las movilizaciones y se incrementó el número de detenidos y encarcelados, esta demanda de libertad se hizo extensiva a todos los presos de la protesta. Sin embargo, buena parte de los manifestantes, y en especial los sectores más fieles al presidente, no ha dejado de exigir la libertad del presidente e inclusive su restitución en el cargo.

Esta plataforma de cuatro puntos políticos se enmarca a su vez en una demanda de reivindicación histórica ancestral, que reclama una inclusión plena en la nación peruana y rechaza la sistemática exclusión que los pueblos quechuas, aimaras y originarios han sufrido por parte de las élites criollo-mestizas. En todo el país, y con especial fuerza en el sur andino, los manifestantes remarcaban que la protesta no iniciaba el 7 de diciembre, sino que era un reclamo de doscientos años. En el bicentenario de la independencia, esta alusión impugnaba la fundación y desarrollo de la República, que nunca tuvo en cuenta a las mayorías indígenas,

acaparando no solo la tierra y los recursos sino también el poder político. Salvo en el gobierno de Velasco, donde se reconoce un esfuerzo por desarrollar un proyecto de nación que reivindica al campesino, al quechua y a figuras como Tupac Amaru II y se enfrenta a la oligarquía y la clase política, las mayorías indígenas no identifican otro proceso nacional que los considere plenamente.

Vale resaltar además que recién con la Constitución aprobada en 1979 este sector de la población peruana accedió al sufragio universal, incorporándose a la vida política. No obstante, en 1981 el conflicto armado, que impactó con especial fuerza en los pueblos del sur andino, detuvo este proceso de incorporación a la vida política, imponiéndose la violencia y los desplazamientos. Durante los noventa, la pacificación de Fujimori significó la anulación del poder civil con los comandos político-militares, frenando otra vez la posibilidad de participación política democrática activa. Apenas desde 2001 en adelante, los peruanos de pueblos originarios, campesinos y semi-rurales tienen una participación más plena, disputando el poder local, mientras que a nivel nacional delegan el voto en partidos o candidatos que coinciden con sus demandas, pero no los identifican como propios. Cuando en 2021 estos sectores asumieron la democracia representativa de una manera más

integral –apoyando una candidatura, ejerciendo su voto y eligiendo a uno de los suyos– debieron enfrentar toda la maquinaria de la clase política tradicional que ninguneó a su presidente, desconoció su elección y terminó por destituirlo. Hay un sentimiento de indignación y traición, pero también la confirmación de que su lucha es de larga data y no termina. Así lo expresa Jonatan, agricultor de treinta años, natural del distrito de Ocobamba, Apurímac:

Nosotros nos sentimos traicionados, nos sentimos engañados por este poder que gobierna nuestro país desde Lima. Apurímac está en pie de lucha pidiendo la renuncia de la señora Dina Boluarte, cambio de Constitución, libertad para Pedro Castillo. Vamos a luchar esta guerra que ya lleva más de 200 años, yo sé que, con el apoyo y la unidad de todos, vamos a lograrlo. Aquí, Uripa, Chincheros, Ocobamba, Abancay estamos en la lucha... Vamos a sacar a esos políticos burócratas que nos han denigrado dos siglos, *dándonos migajas de lo que nuestro país produce.*

En este punto, es importante resaltar que los movimientos sociales son agentes activamente comprometidos con la producción y mantenimiento

de sentidos, desarrollando en la acción colectiva “procesos de enmarcamiento”, entendidos como formas de organizar la experiencia y ubicarla en referentes discursivos mayores (Bendford y Snow, 2000). La densidad histórica de estos marcos en los que inscriben la acción permite un compromiso y reconocimiento amplio, así como la conciencia de ser parte de un nosotros que los trasciende y marca el camino de la lucha. Para los protagonistas del estallido, la protesta no empieza ni termina con ellos y en el caso de los pueblos originarios que han afrontado experiencias de dominación colonial, este convencimiento es fundamental para resistir eventuales fracasos y reorganizar la lucha. No es la primera vez que quechuas, aimaras, amazónicos o sus descendientes se enfrentan al poder reclamando ser parte de un país que, consideran, los maltrata y aprovecha sus recursos. En tal sentido van las afirmaciones de Julio, de 25 años, quien llegó a Lima junto a decenas de comuneros de Maranganí en Cusco. Ellos se alojaron en la Universidad de San Marcos y fueron detenidos cuando la Policía violó el campus universitario y los detuvo arbitrariamente por una semana acusándolos de terrorismo:

A través de la historia, el pueblo peruano ha sufrido por culpa de esos lacayos que se creen amo y señor del Perú. Hoy nos tildan de terro-

ristas, y los primeros terroristas son ellos, están matando a la gente peruana a través del hambre, la pobreza, el robo que realizan. En nuestro propio país vivimos como inquilinos. A lo largo de doscientos años, desde la independencia, los campesinos seguimos viendo vulnerados nuestros derechos, están siendo vendidas nuestras tierras, están regalando nuestras minas y para el campesino no hay nada.

En suma, el estallido popular plantea una agenda de demandas para solucionar la crisis política a corto y mediano plazo, enmarcadas en una narrativa de larga duración que exige terminar con la exclusión histórica hacia los sectores populares, especialmente campesinos y originarios. De manera unánime, se exige la renuncia de Dina Boluarte, el cierre del Congreso, el cambio de la Constitución de 1993 y la libertad a Pedro Castillo. De manera menos consensuada se plantea la restitución presidencial. Es una agenda antagonista que explicita un claro rechazo al sistema político y a la manipulación de la democracia, aunque todavía no haya logrado formular claramente aquello que propone como proyecto político de nación. Sin duda, es un proceso de politización en construcción, que posiblemente continuará forjando su propia identidad, programa y visión política. Lo que vale resaltar en

este momento es la irrupción de una plataforma de demandas unificada a nivel nacional y de alcance histórico, que convoca a la movilización, demostrando capacidad organizativa y sumando solidaridades indispensables para interpelar con mayor fuerza al Estado y la sociedad.

De la comunidad a Lima. Organización y solidaridad en la protesta

El ciclo de protesta que inició el 7 de diciembre de 2022 y se extendió aproximadamente hasta la quincena de marzo de 2023 con presencia en casi todo el país, demostró un importante nivel de organización que permitió realizar paros, bloqueos de carreteras, desplazamientos a Lima y otros eventos masivos. Asimismo, reveló gran capacidad para movilizar recursos y generar solidaridades que permitieron la ejecución de acciones como la “toma de Lima”, la misma que requirió un importante apoyo para trasladar a miles de manifestantes de sus regiones a la capital, mantenerse en la ciudad y finalmente regresar a sus localidades.

En un inicio, la gran mayoría de la clase política e intelectual percibió a las movilizaciones como acciones espontáneas, dispersas y hasta predecibles. Se sabía que destituir al profesor Castillo del

cargo presidencial generaría cierta resistencia pues, a diferencia Kuczynski, Vizcarra o Merino, Pedro Castillo tenía una base social afianzada. Justamente por ello el congresista y ex-almirante Jorge Montoya afirmó públicamente que la vacancia de Castillo tendría su “cuota de sangre”. Sin embargo, conforme pasaban los días y las protestas se multiplicaban en el territorio con gran masividad, la misma clase política mostraba sorpresa y preocupación. Perú vivía el estallido social más grande y de mayor cobertura territorial en décadas y no se escuchaban líderes regionales o nacionales que asumieran la vocería. Tampoco se percibía una sola estructura de movilización, gremio o coordinadora que articulara mínimamente las acciones, definiera lugares y eventos de protesta. Por el contrario, los congresistas y líderes políticos que se atrevían a arrogarse alguna representación o contradecir al movimiento eran rápidamente rechazados. Lo mismo pasaba con las organizaciones tradicionales, pues las masivas manifestaciones, especialmente en el sur, marcaban su distancia con sindicatos como el SUTEP (que se había opuesto al gobierno de Castillo) o la CGTP (a la que acusaban de ser demasiado moderada).

La pregunta era entonces: ¿quién convocaba a estos manifestantes? ¿Cuáles eran los dirigentes que tomaban las decisiones y en qué instancia

decidían las acciones? Para Dina Boluarte y sus aliados del Congreso, el principal dirigente y quien estaba detrás de todo era Pedro Castillo, que desde el penal de Barbadillo coordinaba las acciones y hasta era responsable de los muertos. También buscaban responsables externos, que podían ser el omnipresente Evo Morales y los ponchos rojos de Bolivia, el chavismo internacional o el Foro de San Pablo. Tales afirmaciones eran totalmente insostenibles y evidenciaban el profundo desconocimiento de los poderes estatales sobre la protesta.

Del otro lado, tanto los desplazamientos de los manifestantes desde sus regiones hacia la capital, como las largas jornadas de protesta durante casi cuatro meses, demostraban capacidad de movilizar recursos y solidaridades. Por ello, la otra pregunta que se hacían los poderes del Estado y los grandes medios era quién financiaba la protesta, de dónde salían los buses, alimentos, alojamiento y recursos en general. Al respecto, en una entrevista radial del 4 de enero, Dina Boluarte señaló que la protesta contaba con cuantiosos financiamientos de carácter ilícito: “Voy a reiterar que nos estamos enfrentando a dos fuerzas ilegales: la minería ilegal y el narcotráfico. Porque toda esa logística para esas marchas y protestas, no vienen del aire”. Con este argumento se facilitó la criminalización y persecución de dirigentes sociales y sindicales

Es fundamental entonces analizar estos dos ejes –la organización y la movilización de recursos– para complementar el análisis y comprensión del estallido social. En este último capítulo abordamos, en primer lugar, cómo se convocó a la protesta, qué estructuras de movilización la hicieron posible y qué liderazgos destacaron en los distintos puntos del país, trascendiendo como voceros legitimados. En segundo lugar, explicamos cómo se lograron acopiar los recursos para sostener la protesta por casi cuatro meses, y cómo se consiguió la solidaridad necesaria para llevar adelante acciones de envergadura como la toma de Lima. En ambos casos, se evidencia la activación de un tejido organizativo que, de manera incipiente todavía, trasciende de lo comunal a lo nacional y logra convocar solidaridades ancestrales que se renuevan y amplían, permitiendo resistir la represión, tomar iniciativa, replegarse y volver a la lucha.

Organizar la indignación: de los autoconvocados a la CONULP

Desde el mismo 7 de diciembre, luego de la destitución de Castillo, las protestas se multiplicaron

en todo el país sin que existiera un llamado oficial, una estructura de organización o una vocería única que las convocara. Generalmente, en situaciones de conflicto, previo a la movilización, se publicaban sendas convocatorias anunciando las fechas y acciones de protesta. En el caso de paros o jornadas nacionales, la convocatoria la publicaba el sector de movimientos sociales tradicional, especialmente la CGTP. En los episodios de conflictividad social, lo usual eran convocatorias de las organizaciones directamente relacionadas a la problemática, como ocurrió en el Paro Amazónico de 2009 con la Asociación Interétnica de la Selva Peruana (AIDSESP) o en las protestas contra la minera Conga de 2012 con el Frente de Defensa Ambiental de Cajamarca. Cada coyuntura de protesta presentaba a su vez liderazgos que asumían vocería emitiendo declaraciones y llevando el diálogo, de ser el caso. Nada de eso ocurrió en el estallido de diciembre; por el contrario, en su gran mayoría las organizaciones existentes fueron desbordadas por masas que, aunque levantaban una misma plataforma, no compartían estructuras ni liderazgos, ni estaban dispuestas a dejarse subsumir por organizaciones constituidas.

Tal como lo confirman diferentes testimonios en la prensa y los entrevistados para este libro, el ciclo de protestas por el 7D evidenció en primer término

una autoconvocatoria generalizada y simultánea –gatillada por la destitución de Pedro Castillo, la traición de Dina Boluarte y el golpismo del Congreso– que encontró soporte en estructuras organizativas comunales y territoriales. Prácticamente todo el mes de diciembre, las protestas respondieron a autoconvocatorias articuladas por organizaciones del campo popular, tales como las comunidades indígenas y campesinas, los frentes de defensa, asociaciones comerciales, gremios, juntas vecinales y otras existentes en la comunidad y el territorio. Es el caso, por ejemplo, del Barrio Chino en Ica, una de las primeras zonas en movilizarse, donde trabajadores y vecinos se autoconvocaron en la Panamericana Sur para bloquear la vía y hacer escuchar sus demandas. Así manifiesta Rosa, dirigente vecinal, cuyo hijo, periodista de la agroindustria, estuvo en las protestas y recibió un balazo en el hombro:

Al ver lo que estaban haciendo en Lima, burlándose de nuestro voto, de nuestros derechos, los jóvenes han salido a bloquear la Panamericana, se han pasado la voz y así, autoconvocados, se han reunido y han resistido. “Vamos a resistir”, han dicho, y ni con sicarios ni con policía han podido con ellos; ha tenido que venir el ejército para que se retiren... Pero van a seguir, hasta que caiga la asesina.

Conforme las protestas eran respondidas con una cruenta represión y se incrementaban las cifras de asesinados, heridos y detenidos, la indignación popular crecía. Lejos de menguar, las protestas se multiplicaban en número de manifestantes y cobertura territorial. La desmedida represión motivó a la población movilizadora a coordinar medidas más efectivas, pues el adversario se mostraba poderoso y dispuesto a todo con tal de no dejar el poder. En enero, las protestas se reanudaron luego de una tregua navideña de diez días. El epicentro estuvo en Juliaca, la provincia más poblada de Puno con más de 300 mil habitantes y gran dinamismo comercial. El 9 de enero, la masiva movilización fue respondida con una brutal represión policial que dejó dieciocho muertes en menos de doce horas. Según la policía, la represión se desató para impedir que los manifestantes tomaran el aeropuerto. Esta versión, además de justificar una violencia indiscriminada, no se sostiene, pues entre los asesinados se cuentan un joven estudiante de medicina que asistía a los heridos, una menor de edad y trabajadores que se ubicaban bastante lejos del terminal aéreo. El dolor e indignación ante la masacre estremeció al país y llevó a la población a autoconvocarse para coordinar nuevas acciones. En Puno, las trece provincias de la región se reunieron para definir las siguientes acciones de protesta. Sobre el tema, Deysi Huanca manifiesta:

El 9 de enero hubo tanta muerte que al día siguiente todos decidimos ir a Puno a encontrarnos. No había ningún líder que dijo “vengan”; éramos autoconvocados. Mi mamá me dijo: “vamos, Deysi”, y nos fuimos, de llave hemos ido seis carros llenos. De las trece provincias llegamos a Puno *y ahí hablaron*: “Hermanos, nos están matando a tantos peruanos, hay que ser fuertes, estar unidos, seguir luchando”. Así decían.

Pero, junto a estas masivas autoconvocatorias, también se activaron estructuras organizativas existentes, claves para coordinar las acciones durante la movilización. En primer lugar, debe destacarse el rol de las comunidades indígenas y campesinas, especialmente de las autoridades originarias en el sur andino. Presidentes de las comunidades, alcaldes, varayocs, tenientes gobernadores en la zona aimara y otros líderes territoriales, se unieron a la convocatoria y procuraron encauzar la indignación. En los distritos de regiones como Apurímac, Puno o Cusco, se multiplicaron las asambleas donde la población debatía la coyuntura política y decidía las acciones de protesta a ejecutar. En cada Asamblea la directiva comunal dirigía el debate, recogía los acuerdos, aseguraba la ejecución de lo decidido y posteriormente rendía cuentas de los resultados.

La legitimidad de estas autoridades superó largamente a las de cualquier congresista o dirigente político, generando gran cohesión, por lo menos a nivel local. En el caso de las provincias de Chincheros y Andahuaylas, en la región Apurímac, miles de campesinos y pobladores de las comunidades adyacentes, confluyeron en la plaza de Uripa, discutiendo sobre la coyuntura, aprobando la plataforma de lucha y definiendo participar en la toma de Lima. La dinámica se repitió en Cusco, donde la primera semana de enero, las comunidades de provincias como Limatambo, Canchis, Anta o Chumbivilca se reunieron acordando movilizarse a la ciudad de Cusco el martes 10 de enero. Los dirigentes de las comunidades estuvieron en la primera línea durante las protestas y lamentablemente recibieron los embates de la represión. Es el caso de Remo Candia, presidente de la comunidad campesina Anansaya Uninsaya Ccoyana, y de la Federación Campesina de la provincia de Anta, asesinado por un impacto de bala en el tórax el 11 de enero de 2022 mientras lideraba el paro regional en el Cusco.

Otra organización que se activó durante las protestas fueron los Frentes de Defensa, una federación de espacios de coordinación de carácter territorial que agrupan distintas organizaciones, sean gremios de transportistas, asociaciones de

comerciantes de mercados, campesinos y otras, con presencia activa en su circunscripción. Estos Frentes pueden ser de carácter distrital, provincial o incluso regional y suelen activarse en coyunturas críticas. No existen en todo el país, pero algunos son representativos y legitimados, como el Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho (FREDEPA), fundado en 1966. También es importante el Frente de Defensa de los Intereses y Desarrollo de la Provincia de Andahuaylas (FREDIPA), que tuvo un rol activo durante las protestas de diciembre, acompañando a las comunidades e intentando articular diferentes espacios, aunque no siempre con éxito. Vale señalar que la represión del Estado se ensañó con estas instancias organizativas denunciando y criminalizando a sus dirigentes. El caso más dramático es el del mismo FREDEPA, pues el 12 de enero la Policía detuvo a toda su dirigencia bajo la acusación del delito de terrorismo. Los diez integrantes de la directiva fueron presentados ante la prensa como el enlace con Sendero Luminoso, y aunque no se mostró ninguna prueba contundente, fueron sentenciados a 36 meses de prisión preventiva. Al respecto, Magno Ortega, histórico líder del FREDEPA, comenta la persecución:

Justamente, a consecuencia del discurso de la Dina, se ha activado la organización popular.

En el caso de Ayacucho, más allá de cualquier discrepancia, se ha coordinado permanentemente con el FREDEPA y se ha logrado el acuerdo de tener el 15 de diciembre como fecha central de movilización. Eso ha tenido su costo y han arremetido contra la directiva, pero el Frente es una organización histórica, que va a sobrevivir a esta persecución como sobrevivió a otras en el segundo gobierno de García, por ejemplo.

Cabe destacar el rol que juegan también las organizaciones y gremios locales, pues, aunque muchas veces son parte del Frente de Defensa de la localidad o sus integrantes son a la vez miembros de la comunidad, tienen un margen de organización propio. Asociaciones de vendedoras de mercado, gremios estudiantiles de universidades públicas, juntas de regentes, gremios campesinos, asociaciones de comerciantes, gremios de mineros informales se activaron también deliberando sobre la coyuntura y tomando acuerdos para participar de la protesta. Entre otras cosas, este involucramiento activo permitió que medidas de protesta como el paro regional se acataran con más contundencia, pues implicó la no circulación de vehículos o el cierre temporal de mercados, hoteles y restaurantes.

Desde la quincena de enero, después de poco más de un mes de movilización en las regiones y en reacción a la masacre de Juliaca, los manifestantes de diversas provincias tomaron la decisión de trasladar la protesta a la capital en la llamada “toma de Lima”. Miles de hombres y mujeres de por lo menos diez regiones y principalmente del sur andino, abordaron buses y camiones, desplazándose por las carreteras nacionales y confluyendo en la capital.⁶ Llegaron a una ciudad hostil sin haber coordinado previamente, ni siquiera los jefes de cada delegación provincial conocían a los de su misma región. Tampoco confiaban en los gremios y organizaciones presentes en la capital. En un primer momento, las delegaciones de provincias se trasladaron y movilizaron de forma dispersa, sin consensuar puntos de concentración ni rutas de desplazamiento, siendo blanco fácil de la represión policial y el acoso de la gran prensa que los estigmatizaba. Fue la necesidad de sostener un mínimo de coordinación en Lima para definir y viabilizar acciones de lucha, lo que impulsó a conformar el Comité Nacional Unificado de Lucha del Perú

6 Se calcula que en su mejor momento unas treinta mil personas llegaron a Lima la tercera semana de enero de 2022, manteniéndose en la capital hasta fines de marzo

(CONULP). Así lo reconoce Roberto Huaraca, integrante de la delegación de Apurímac que participó de la fundación:

Nos costó organizar el CONULP, pero veíamos la necesidad de tener una coordinación a nivel nacional que decida ordenadamente por lo menos a dónde vamos, por dónde marchamos, cómo marchamos, porque todo era un desorden. La CONULP se organizó en Lima con las cinco regiones que nos hemos levantado en Paro: Puno, Cusco, Apurímac, Huancavelica y Madre de Dios; luego se han sumado otras. Han sido reuniones hasta la una, dos de la mañana, hemos discutido duro, pero finalmente el 22 de febrero hemos logrado fundar el Comité.

El CONULP se fundó la quincena de febrero de 2022 en la ciudad Lima, básicamente como una instancia de coordinación ejecutiva para resolver temas operativos de la protesta que de no atenderse afectaban las acciones y menguaban la convocatoria. La coordinación se hizo urgente pues el Estado de emergencia, la represión y la militarización de la ciudad dificultaban las concentraciones y desplazamientos de los manifestantes. Asimismo, la persecución y criminalización a los dirigentes hacía indispensable contar por lo menos con un

enlace legal que pudiera defender a quienes eran detenidos en las marchas y concentraciones. El CONULP también asumió esa tarea, coordinando con colectivos de abogados que brindaron asesoría y defensa.

En términos orgánicos, el CONULP se estructuró bajo el liderazgo de una directiva provisional colegiada, conformada por un delegado por cada región más un alterno o accesitario. Posteriormente, cuando las delegaciones dejan Lima y retornan a sus regiones, el CONULP pasa por un proceso de reorganización. Ya no es el delegado en Lima quien asume la dirigencia, si no quien es ratificado por la Asamblea de la provincia o región de procedencia. Asimismo, se crean Secretarías Ejecutivas destinadas a rubros importantes como economía, movilización, prensa y propaganda, entre otras. Se trata de una instancia de coordinación bastante reciente cuya consolidación dependerá de la capacidad de sus dirigentes y las bases para lograr acuerdos, trascendiendo lo local y dando pasos más firmes a nivel nacional.

En todo este proceso quedaron fuera los sindicatos tradicionales y los partidos de izquierda, que fueron rebasados e incluso entraron en tensión con los manifestantes. Sobre los primeros, desde un inicio existió la percepción generalizada de que las centrales sindicales como la CGTP o

Construcción Civil (FTCCP) no tenían representatividad real y menos movilizaban grandes masas, pero pretendían “bajar línea” sobre qué consignas levantar o qué acciones de protesta desarrollar y dónde. En Lima, la actitud de los sindicatos tradicionales de pretender liderar la movilización pidiendo al CONULP que se sumara a sus convocatorias y acatara las jornadas y rutas propuestas, fue rotundamente rechazada y generó una distancia que no llegó a superarse. Durante la movilización en Lima, en la práctica existieron dos convocatorias y hasta dos rutas diferentes en una misma jornada de protesta.

Respecto a los partidos de izquierda, si antes del estallido eran vistos negativamente como parte de una misma clase política, su actuación frente a la vacancia de Pedro Castillo primero y el gobierno de Dina Boluarte después, incrementó exponencialmente el rechazo. En el caso de los partidos con presencia en el Congreso se les reprochaba votar a favor de la vacancia, pues de los cuarenta y tres congresistas de las bancadas de izquierda –léase Perú Libre, el Bloque Magisterial o Juntos por el Perú– apenas seis votaron en contra. A la par, congresistas de estas mismas bancadas fueron cuestionados por reunirse con Dina Boluarte, reconociéndola como mandataria y brindando apoyo a lo que consideraban un gobierno usurpador. Las palabras de

Luis Cruz, alcalde del centro poblado de Itapalluni, provincia de Ilave en la región Puno, son bastante ilustrativas sobre los sindicatos y partidos:

Los partidos no han estado presentes, mucho menos SUTEP o CGTP. Aquí en Puno hemos sido las comunidades indígenas, centros poblados y los barrios, esa ha sido la organización, a nosotros nadie nos ha convocado: ni un partido, ni izquierdas, ni sindicatos, todos nos hemos autoconvocados y hemos coordinado para organizarnos mejor en la lucha. Sabemos que sin un líder es difícil, pero en las comunidades existen autoridades originarias. Desde abajo surgen los propios líderes, somos culturas milenarias.

Justamente, durante el ciclo de protesta llama la atención la ausencia de liderazgos legitimados capaces de asumir un nivel de dirección y vocería. A nivel local, son las autoridades comunales o líderes de los Frentes de Defensa quienes ejercen la conducción, coordinan acciones y, de ser el caso, brindan declaraciones a medios de comunicación. Durante las jornadas de protesta en la toma de Lima, fueron los responsables de cada delegación regional quienes asumieron tareas de conducción dentro del CONULP, ejerciendo vocería de manera

colegiada y rotativa. Es importante reconocer que la fragmentación existente durante la etapa de subalternidad y episodios de conflictividad social se mantuvo post 7 de diciembre. El estallido social no resolvió características sustantivas de los movimientos sociales peruanos como la dispersión, fragmentación, desconfianza y segmentación territorial, sino que las mantuvo, dificultando la acción colectiva, por lo menos en este primer ciclo de protesta.

Pero si el estallido no visibilizó nuevos líderes, tampoco los liderazgos políticos existentes en las izquierdas o el campo popular cubrieron el espacio o lograron un buen posicionamiento. El caso más llamativo es el del mayor Antauro Humala, quien saltó a la palestra junto a su hermano Ollanta encabezando una breve asonada militar al final del fujimorato. Antauro fundó el movimiento etnocacerista e intentó tomar el cuartel de Andahuaylas en 2004, fracasando estrepitosamente en el intento y pasando 17 años en prisión. Salió en libertad en setiembre de 2022 y retomó la actividad política movilizándolo por el sur andino a sus reservistas.⁷ El sábado 10 de diciembre, tras la juramentación

7 Los reservistas son quienes han prestado servicio militar obligatorio y pertenecen a una unidad de reserva militar.

de Boluarte, Antauro Humala convocó a una gran concentración en la Plaza San Martín. La expectativa era grande, pues se pensaba que podía encabezar la resistencia al régimen. No obstante, el llamado de Antauro a respaldar el gobierno de la “compatriota Dina” generó gran indignación entre la multitud congregada, al punto de que tuvo que retirarse entre piedras y botellazos.

Entre otros personajes de la izquierda que también fueron desbordados por el estallido puede contarse a la excandidata presidencial Verónica Mendoza, quien rápidamente se pronunció contra lo que denominó el “auto golpe” de Pedro Castillo, respaldando un gobierno de transición liderado por Dina Boluarte. Esta postura la mantuvo aproximadamente hasta la masacre de Juliaca, generando fuertes críticas en la población movilizada. Resalta también la posición de Vladimir Cerrón, líder del partido Perú Libre, quien junto a su bancada respaldó la vacancia de Pedro Castillo, definiendo el voto a favor de la destitución presidencial. Asimismo, las reiteradas coincidencias de Perú Libre con el fujimorismo en el Congreso han significado un tácito respaldo al gobierno de Boluarte,

Muchos de los partidarios de Antauro Humala eran justamente reservistas del ejército peruano.

generando gran rechazo en la ciudadanía, especialmente en los sectores movilizados.

En general desde el campo popular y las izquierdas no surgieron nuevas figuras y las existentes quedaron bastante mal posicionadas y desbordadas por el movimiento social. Quien medianamente mantiene su capital político y es reconocido como un líder nacional con legitimidad, representatividad y cariño popular es Pedro Castillo. No obstante, por encontrarse preso se ubicó más como una figura simbólica a reivindicar que como un conductor de la protesta. El estallido se sostuvo básicamente en liderazgos locales que emergieron en la lucha, coordinando las acciones, jugando un rol destacado en la movilización de recursos y generando solidaridades fundamentales para dar a conocer sus demandas y concretar adhesiones.

Movilización de recursos y solidaridad

Para terminar esta sucinta aproximación al estallido social peruano, es indispensable abordar cómo la población logró movilizar los recursos y solidaridades necesarias para sostener la protesta durante casi cuatro meses, llevando adelante acciones de

envergadura como la denominada “toma de Lima”. Contrario a lo que afirmaba la nueva coalición gobernante, con Dina Boluarte a la cabeza, no existió financiamiento ilícito proveniente del narcotráfico o la minería ilegal, tampoco hubo conexiones internacionales inyectando recursos o infiltrando operadores políticos. Lo que más bien destacó durante todo el ciclo de protesta fue la activación de un tejido social arraigado en lo étnico ancestral, caracterizado por la reciprocidad y un sentido de comunidad que partió de lo local y trascendió a lo nacional.

Un primer nivel en la movilización de recursos a tener en cuenta es el nivel local, el mismo que, conforme avanzaba la protesta, escaló del territorio comunal hasta el distrital y provincial. Los primeros días post 7 de diciembre, en diversas regiones del Perú y especialmente en zonas del sur andino como Apurímac, Puno, Cusco o Huancavelica la población se movilizó de las comunidades a cada capital de distrito para congregarse en la plaza central. En reuniones y asambleas improvisadas, los comuneros y vecinos decidieron ir a las capitales de provincia o ciudades intermedias para agruparse y hacer sentir su protesta con más fuerza. Para el desplazamiento acopiaron recursos que consideraban indispensables, pues no se trataba solamente de marchar o bloquear las carreteras: había que

asegurar movilidad, alimentación y el lugar donde pernoctar. Fueron principalmente las autoridades comunales quienes asumieron ese rol organizativo, recolectando entre los vecinos papas, chuño, verduras, frazadas e incluso dinero. Todo quedaba anotado en el libro de actas de la comunidad, pues posteriormente la directiva está obligada a rendir cuentas.

Una vez que los manifestantes se concentraban en las capitales de provincia o ciudades intermedias, debían también agenciarse nuevos recursos para solventar la estadía. Las delegaciones que confluyeron en las ciudades debían resolver temas logísticos como alimentación, albergue o abrigo, para lo cual se formaron sobre la marcha Comisiones de logística y economía conformadas generalmente por dirigentes de las comunidades u otros líderes de organizaciones territoriales, como los Frentes de Defensa. Es representativo el caso de Uripa, capital del distrito Anco Allo, provincia de Chincheros, a medio camino entre Ayacucho y Andahuaylas. La ubicación estratégica de esta localidad facilitó su crecimiento comercial y poblacional los últimos diez años, posicionándose como centro de actividad política. Al empezar las protestas, cerca de cinco mil pobladores de las comunidades campesinas adyacentes confluyeron en Uripa uniéndose a maestros, comerciantes y vecinos en

general. En jornadas sucesivas, los manifestantes bloquearon la carretera a Ayacucho, marcharon a Chincheros e instalaron una Asamblea permanente en la plaza de la localidad. A la vez, eligieron una Comisión encargada de la logística que aseguró la preparación de la Olla común y consiguió el coliseo para que las comunidades pudieran pernoctar en la ciudad. Como afirma Mariana, docente de Uripa que participó activamente en la movilización, era un trabajo voluntario:

De diferentes comunidades estamos aquí haciendo nuestra olla común. Cada comunidad, cada familia o persona ha traído sus productos, hemos conseguido leña y estamos cocinando un grupo. Hoy me ha tocado a mí con otras hermanas, mañana van a ser otras, y nos vamos turnando, rotando así para que no falte la comida. Todos trabajamos, nadie nos paga. Estamos luchando unidos para que se largue la usurpadora.

Un siguiente nivel en la movilización de recursos ocurrió cuando los manifestantes reunidos en ciudades y/o capitales de provincia tomaron la decisión de trasladar la protesta a la capital en la “Toma de Lima”. Esta medida se decidió de forma simultánea en diversas regiones del país, especialmente a

partir de la quincena de enero, tras la masacre de Juliaca. La evaluación que la población movilizada compartía era que, pese a lo masivo de las protestas en las provincias, sus demandas no eran atendidas; al contrario, eran respondidas con una cruenta represión que se cobraba decenas de vidas. Antes de que el desánimo desmovilizara a la multitud, tomaron la decisión de ir a protestar en el histórico centro del poder. Como dice Alberto, de la delegación del VRAE, presente en la masacre de Ayacucho: “Decidimos ir a Lima porque ya el pueblo se estaba desanimando, en ahí nos estaban disparando, sin compasión, nos estaban matando”.

Una vez que las distintas localidades decidieron participar en la Toma de Lima, se procedió a organizar el traslado. Lo primero fue definir las y los voluntarios que emprenderían el viaje. Mayoritariamente se anotaron jóvenes trabajadores, campesinos, estudiantes universitarios, maestros, dirigentes y autoridades, pero también mujeres con niños pequeños y, en general, quienes quisieran sumarse a la travesía. A la par, se conformaban las comisiones responsables de organizar las colectas de dinero para pagar el transporte que los llevaría a la capital. También se acopiaron alimentos, frazadas y lo que la población pudiera donar. Así narra Efraín Ramos, también de la localidad de Uripa, quien decidió ir a Lima:

El 15 de enero se decidió ir a Lima y me apunté entre los primeritos, la plaza estaba llenecita de gente y los que íbamos a viajar pasamos con una manta y nos ponían 10, 15, 20 soles. Luego fuimos a la radio a hacer llamado a colecta y la gente llegaba a la plaza y ponía para el viaje, traía dinero, traía comida, “vayan a luchar a Lima”, nos decían. Más que nada, la población ha financiado nuestro viaje, nadie ha venido a darnos individualmente, ninguna autoridad, todo ha sido de la población y así ha sido en Puno, en Moquegua...

Por lo general, quienes asumieron la tarea de acopiar y distribuir los recursos para el viaje fueron las autoridades comunales, los miembros de comisiones de logística y/o los mismos manifestantes que se trasladaban a Lima. En cada plaza, se colocó una caja o una manta donde se depositaron las donaciones de dinero, de alimentos o de vestuario. Para ampliar el acopio de recursos, se apelaron a estrategias de comunicación, como mensajes en la radio o comunicaciones en grupos de *Facebook* y *WhatsApp*. Vale destacar las donaciones individuales realizadas por pequeños empresarios y comerciantes locales, que donaron frazadas, agua embotellada o conservas. También los dueños de camiones, buses y combis colaboraron con la

protesta poniendo a disposición sus vehículos y cobrando solamente el precio de la gasolina. De esta forma, demostraban que compartían la misma lucha, expresando sentido de comunidad y hermanamiento

La solidaridad y capacidad para agenciarse de recursos también se despliega durante el trayecto de manifestantes a Lima. Los buses o camiones con las delegaciones hicieron paradas en diversas localidades pues eran desplazamientos largos de más o menos dos o tres días por carreteras frecuentemente intervenidas por la policía, que buscaba impedir su llegada a la capital. En casi todos los pueblos donde paraban, eran recibidos por decenas de personas congregadas en la carretera que les entregaban frutas, agua, galletas y les expresaban afecto, solidaridad y preocupación. Milagros, integrante de la delegación de Juliaca, resalta la solidaridad encontrada:

En la asamblea dijeron: “las personas que quieren ir, anótense”. Y nosotros nos hemos organizado, de Ilave habremos salido unas trescientas personas, como cinco carros hemos salido. Antes de partir, la gente nos daba galletas, agua, dinero, frazadas para el camino... como si *íbamos a la guerra* nos abrazaban. “Vas a luchar, hermanita”, me decían en Juliaca, con

tanto dolor, las mamitas de los que mató la Policía. “Por favor, hagan justicia”, decían. En cada departamento que parábamos con cariño nos han recibido. En Arequipa nos dieron fruta, en Ica uvas también. Hemos ido parando en cada pueblito y así nos donaban pan, agua gaseosa, lo que tenían. “Luchen por nosotros”, nos decían.

Finalmente, cuando las delegaciones llegaron a Lima, se inició otro momento en la movilización de recursos y la generación de solidaridades para resistir en la capital. Lo primero que las delegaciones debían resolver era dónde hospedarse; la mayoría había salido de sus regiones sin resolver este tema, pensando que rápidamente lograrían los objetivos y volverían en diez o quince días. Al arribar a la capital, las delegaciones tocaron la puerta de los sindicatos, pero, salvo los gremios campesinos como la CCP, no obtuvieron respuestas positivas. Recurrieron también a las principales universidades públicas, que se encontraban en temporada de vacaciones y disponían de amplios espacios. En el caso de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), las autoridades universitarias abrieron la puerta de esta casa de estudios recibiendo a cerca de dos mil manifestantes en su mayoría estudiantes provincianos. En el caso de la Universidad

Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), los estudiantes tomaron las instalaciones y abrieron sus puertas para recibir a los manifestantes, albergando a unos mil quinientos hombres y mujeres del sur del país. Sin embargo, la rectora se opuso férreamente a esta medida y ordenó a la policía desalojar el campus en una violenta acción que dejó cientos de detenidos y estudiantes judicializados.

Las redes que mejor funcionaron para albergar a los manifestantes fueron las asociaciones de migrantes provincianos en Lima. Se trata de organizaciones de hijos o nietos de migrantes, que llegaron a la capital procedentes de las provincias de Puno, Cusco, Juliaca, Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, entre otras, y que conservan sus vínculos con la tierra de origen, organizando las festividades del pueblo, brindando ayuda mutua y desarrollando iniciativas de solidaridad. Algunos contaban con locales grandes y centros deportivos que pusieron a disposición de los manifestantes. Otros apelaron a asociados pudientes que prestaron casas de gran tamaño ubicadas por lo general en los conos de la capital, como San Juan de Lurigancho, Carabayllo o Villa el Salvador. Estas redes fueron determinantes para recibir a las delegaciones que llegaban a Lima desde diversos puntos del país. Los “residentes” se comprometieron en la tarea de recibir y ubicar a sus paisanos en alojamientos, además de conseguir

alimentos y brindarles protección legal en casos de criminalización o persecución. En esa línea van las palabras de Esteban, de Andahuaylas:

Primero estuvimos en San Marcos, pero vimos que las cosas no estaban bien ahí, había mucha presión de que podía sacarnos la policía, así que mejor nos fuimos. Como tenemos paisanos, residentes en Lima, ellos nos han apoyado, han buscado alojamiento y nos hemos quedado casi dos meses. Lo bueno es que nuestros paisanos, que son de Apurímac, nos apoyaron bastante con alimentos, colchones. Hubo mucha solidaridad.

Vale resaltar también la activación de colectas y redes sectoriales de gremios y sindicatos con bases regionales que se activaron para organizar colectas y acompañar a las delegaciones de regiones en Lima. Un sector que destaca es el de los maestros, especialmente los agremiados en FENATE, sindicato del cual Pedro Castillo es fundador. Bases regionales de la FENATE llegaron a Lima procurando mantener un nivel de coordinación nacional, aunque eso conllevara persecución y hostigamiento. Un caso trágico fue el de la dirigente de FENATE Apurímac, Yanet Navarro, maestra de primaria que fue detenida por la policía incautándole el

equivalente a \$600 y un cuaderno donde registraba quiénes colaboraban y cómo distribuir el dinero en medicinas y víveres. La maestra fue presentada como el enlace de poderosos financistas, y el Poder Judicial dispuso tres años de prisión preventiva para investigarla. Gracias a la presión ciudadana, Yanet salió libre tras pasar cuatro meses de injusta carcelería en Lima.

Los recursos y solidaridad con los manifestantes durante la toma de Lima se expresaron de múltiples formas. Se cuentan por ejemplo donativos de egresados y profesionales que dejaban alimentos o ropa en los locales de alojamiento masivo como la UNI o en los Centros de residentes en Lima. También se organizaron campañas de recolección de fondos y donaciones incluyendo fiestas y polladas (fiestas con venta de pollo asado). Gremios campesinos en Lima como CCP, FENMUCARINAP, CNA, CUNARC apoyaron para gestionar y canalizar ayudas. Posteriormente, cuando se organizó el CONULP, también se creó una secretaría de economía que intentó centralizar los donativos. En general, fue un proceso desordenado, más dependiente de los contactos que lograran las delegaciones de provincia que de una estructura bien armada de búsqueda y recepción de donaciones. Lo principal que se recibió fueron alimentos y agua embotellada, pero también ropa y zapatillas, pues las

delegaciones pensaron permanecer poco tiempo y no trajeron suficiente vestido. Posteriormente, también se gestionaron donaciones de máscaras para enfrentar gases lacrimógenos, cascos y otros implementos especialmente necesarios para “la primera línea” que encabezaba las movilizaciones en el centro de Lima.

Otra forma de solidaridad que destacó durante la toma de Lima fue la que desplegaron las y los vecinos de las zonas urbano-marginales que se identificaron profundamente con la protesta y esperaban a los manifestantes en algún punto de su recorrido para alcanzarles agua, alimentos o brindarles algún gesto de respaldo. Por ejemplo, cuando las delegaciones marcharon del cono norte al centro de Lima en una caminata de casi dos horas, los vecinos los esperaban en las vías con botellas de agua, manzanas o pan. También en los lugares donde los manifestantes se concentraban en el centro de Lima, como la Plaza San Martín o la Plaza 2 de Mayo, era frecuente ver llegar a gente que traía almuerzos para repartir, ropa, mascarillas u otros implementos entre los manifestantes. Un caso que pudimos reseñar es el de Hilda, quien llegó desde Huaycán en el cono este hasta la Plaza 2 de Mayo para entregar su aporte a la delegación de la Universidad de Juliaca:

He acompañado la marcha de Huaycán y en la caminata he visto que los chicos se han movili-
zado y se han roto sus zapatillas y yo, como ma-
dre, al ver esta situación de los chicos, he veni-
do por convicción propia a obsequiarles estas
zapatillas. Ese es mi sentir, no son tantas pero
igual estamos compartiendo, son doce pares,
es lo que hago por ellos, porque ellos también
están luchando por mí.

En todo el proceso de solidaridad y movilización
de recursos destaca una reciprocidad que reconoce
que “hago esto por ti porque tú también haces algo
por mí”, premisa arraigada en la cultura andina
que es la base de prácticas ancestrales de gran vi-
talidad en el país como la minka y el ayni. Personas
que no pueden acompañar las protestas colabo-
ran donando lo que pueden y hacen llegar estos
aportes a quienes se movilizan efectivamente; no
lo hacen como quien entrega una dádiva o espera
gratitud, lo hacen como una forma de expresar su
compromiso con la lucha.

Por otro lado, vale destacar el rol fundamental
de las mujeres en todo el ciclo de protesta, reve-
lando un renovado protagonismo. Son las muje-
res quienes tradicionalmente organizan y ejecu-
tan tareas logísticas y esta vez también lo hicieron
con gran eficiencia, aunque ya no exclusivamente.

Sumaron a los varones a las tareas de preparar la olla común, arreglar los albergues o recaudar fondos, conformando grupos mixtos que las liberaron de la exclusividad de los quehaceres organizativos cotidianos. Además, y esto es lo más importante, las mujeres lideraron muchas de las delegaciones regionales en Lima y marcharon en la primera línea incluso con sus hijos en la espalda, como suelen llevarlos en la sierra. Destacó también la revaloración de la etnicidad que hicieron las mujeres, especialmente del sur andino, utilizando sus trajes típicos, enarbolando wipalas y expresándose frecuentemente en quechua y aimara cuando tuvieron oportunidad de ejercer la vocería. En esa línea van las palabras de la señora Alina, expresidenta de la Federación de Mujeres Indígenas de Ayacucho:

Desde el inicio hemos estado pie a pie organizando que no falte nada. En las marchas hemos estado adelante con nuestras banderolas, también las que han ido a Lima han estado adelante incluso con las wawas en la espalda como hacemos aquí. De todo nos han dicho: “animales, indias brutas, ignorantes que no quieren a sus hijos...”. Que digan nomás, nosotras hemos despertado, esto va a seguir.

Finalmente, debe destacar la solidaridad de artistas y personalidades públicas que llamaron la atención sobre la protesta, sea para respaldarla, apoyar a las víctimas o condenar la cruenta represión del gobierno. No fueron muchos, pero destacaron por su compromiso e identificación con los manifestantes. Un caso de gran repercusión mediática fue el de Yarita Lizet, famosa cantante puneña natural de Juliaca, que en solidaridad con las protestas brindó su bus para que los manifestantes se trasladaran a Lima y donó cincuenta mil soles a las familias de las personas asesinadas en Juliaca. Como la artista declaró: “mi corazón y mi solidaridad están con mis hermanos de Puno” (La Lupa, 2023).

En suma, el estallido social peruano, que abarca el ciclo de protesta entre diciembre del 2022 y marzo del 2023, fue posible también por el complejo nivel de movilización de recursos que lograron los manifestantes, articulando instancias territoriales, gremiales, federaciones estudiantiles y redes de paisanaje. Quienes colaboran con alimentos, ropa, víveres o dinero, demostraron así su compromiso con la protesta, pues, aunque no participaran activamente en las jornadas de movilización compartían la plataforma y el sentir de los manifestantes. Asimismo, el compromiso y determinación del pueblo movilizado, y la dureza con la que fueron y son tratados por el Estado, generó

nuevas adhesiones por fuera del núcleo impulsor, ampliando el rango de solidaridad e involucrando a figuras públicas y artistas populares. Fue crucial también la solidaridad y reciprocidad que se desplegó, anclada en una cultura e identidad ancestral que persiste y se renueva. Sin estos elementos, la protesta no hubiera resistido tanto tiempo en condiciones tan adversas. Esta fortaleza del movimiento, le otorga una inusitada potencia y puede ser clave para un nuevo momento de movilización social y representación política.

Reflexiones finales. Tiempos de Pachacuti

En quechua, la palabra “pachacuti” significa la transformación del todo, un cambio general del orden vigente. Es un cambio que, según los pueblos andinos, ha ocurrido otras veces y puede ocurrir nuevamente precedido de grandes luchas e insurrecciones donde los de abajo no aceptan más el orden de los de arriba.

El estallido social que remeció el Perú se inscribe en la larga trayectoria de lucha protagonizada por los peruanos *de abajo* contra las múltiples exclusiones que enfrentan histórica y cotidianamente. Fue el levantamiento de una multitud que irrumpió con rabia e indignación ante el atropello de sus derechos: desconocieron sus votos, boicotearon su gobierno, encarcelaron a su presidente y colocaron a una mujer que gobierna con quienes perdieron las elecciones, y que les dispara y encarcela. “Esta democracia ya no es democracia”, cantan con sonidos ancestrales y vuelven a la lucha.

El desenlace del estallido en los Andes peruanos aún es incierto. Ha culminado un ciclo de protesta, pero la crisis política sigue abierta. Dina Boluarte y la coalición autoritaria que la sostiene no están dispuestos a dejar el poder y han demostrado capacidad de aferrarse a él a cualquier precio. Avanzan en restaurar el decadente modelo neoliberal y profundizar reformas favorables al sector privado y los grupos dominantes, tales como la concesión y renegociación de contratos mineros y recursos estratégicos como el litio. Siempre con el respaldo activo de los Estados Unidos, que ha sellado nuevos acuerdos con el gobierno de Boluarte y eligió a Perú como bastión regional para defender sus intereses en la disputa geopolítica.

El movimiento popular protagonista del estallido debe enfrentar múltiples desafíos, superando rasgos estructurales de los movimientos sociales en Perú que obstaculizan la acción colectiva. Aspectos tales como la desconfianza con el campo político se mantuvieron presentes durante todo el ciclo de protesta, obstruyendo la posibilidad de concretar alianzas con sectores que podrían haber mejorado las posibilidades de lograr sus objetivos. En la práctica, continúan imponiéndose profundas desconfianzas y desencuentros con partidos de izquierda, y el sector tradicional de los movimientos sociales, resaltando fuertes tensiones que impiden estructurar una instancia

organizativa nacional cohesionada, capaz de viabilizar con éxito nuevas medidas de lucha.

En similar sentido, los sectores movilizados enfrentan el desafío de mantener capacidad impugnadora, persistiendo para que su lucha no derive en un largo repliegue defensivo. Para ello, es clave exponer a la sociedad alternativas y soluciones a la crisis que trasciendan la inmediatez de la protesta, alcanzando carácter programático y un nivel nacional. No es tarea sencilla, a la larga se requerirá de un instrumento político que desarrolle propuestas de transformación y sea capaz de disputar puestos de poder con liderazgos que superen el caudillismo local. Si el tránsito de la subalternidad al antagonismo fue largo y complejo, el paso del antagonismo a la emancipación puede ser más difícil y sin éxito garantizado.

Pero el estallido tiene una potencia transformadora y un horizonte histórico pocas veces visto en el Perú contemporáneo. Son los *de abajo* quienes han irrumpido decididos a hacerse escuchar. Es el mundo popular, informal y precarizado, formado en adaptación y resistencia al neoliberalismo. Son en su mayoría peruanos y peruanas de origen indígena que han mantenido una raíz comunitaria, tienen cultura, lengua, autoridades propias, profesionales y propuestas sobre el desarrollo del país. Estos elementos nos hablan de un sujeto

plebeyo, multiforme y cambiante, que avanza en conciencia política y podría construir su propia representación.

El estallido social ha abierto una grieta en el orden de dominación neoliberal donde sujetos resignados atrapados en la subalternidad y la precariedad se desentendían de la política. Hoy, este sujeto popular puede liderar la conformación de un bloque plebeyo, que profundice la democracia acordando un nuevo pacto social plasmado en una Constitución escrita con participación de ellos mismos. Puede también proponer un proyecto de nación que supere la herencia colonial y reconfigure los marcos de la comunidad política, reestructurando el Estado desde el reconocimiento de la plurinacionalidad y la redistribución del poder a los grupos históricamente excluidos.

Los protagonistas del estallido son conscientes de que no es la primera vez que enfrentan desafíos históricos de gran envergadura: “es como nos contaba mi abuela sobre la Bartolina, una lucha que no se termina”, dice Martha, mujer aimara de Yunguyo, aludiendo a la rebelión de Túpac Katari que remeció el altiplano en la colonia. Es posible entonces que esta vez el tiempo del Pachacuti corra a su favor y todos los pueblos del Perú logren vivir con democracia plena, autodeterminación y dignidad.

Bibliografía

- Agencia Andina* (7 de diciembre de 2022). <https://andina.pe>
- Benford, Robert D. y Snow, David A. (2000). Framing processes and social movements: An overview and assessment. *Annual review of sociology*, 26(1), 611-639.
- Comisión de la Verdad y Reconciliación (2004). *Informe Final*. <http://cverdad.org.pe/ifinal/>
- Cotler, Julio (2005). *Clases, estado y nación en el Perú*. Lima: Instituto de Estudios Peruanos.
- Datos abiertos (2020). Ministerio de Salud. <https://www.datosabiertos.gob.pe/dataset/fallecidos-por-covid-19-ministerio-de-salud-minsa>
- Defensoría del Pueblo (2023). *Informe Defensorial N° 190*. www.defensoria.gob.pe
- Esta democracia ya no es democracia (2022). *Youtube*. <https://www.youtube.com/watch?v=2k8DQYVvkP68>
- Flores Galindo, Alberto (1986). *Buscando un Inca, Identidad y utopía en los andes*. La Habana: Casa de las Américas.

- Gago, Verónica (2014). *La razón neoliberal. Economías barrocas y pragmática popular*. Buenos Aires: Tinta Limón.
- García Linera, Álvaro (2015) *La potencia plebeya: acción colectiva e identidades indígenas, obreras y populares en Bolivia*. Ciudad de México: Siglo XXI.
- Gramsci, Antonio (2000). *Cuadernos de la cárcel*. Ciudad de México: ERA.
- Instituto Nacional de Estadística e Informática (2023) www.inei.gob.pe
- La Lupa* (17 de enero 2023). <https://lalupa.pe/famosos/yarita-lizeth-dispone-su-bus-de-artista-para-trasladar-manifestantes-de-juliaca-hacia-lima-64533/>
- López, Sinesio (2010) Estado y ciudadanía en el Perú en *El Estado en debate, múltiples miradas*. Lima: PNUD.
- Mariátegui, José Carlos (1931). El Problema del Indio. En *Siete ensayos de interpretación de la realidad peruana*. Ciudad de México: ERA.
- Modonesi, Massimo (2010). *Subalternidad, antagonismo, autonomía. Marxismo y Subjetivación política*. Buenos Aires: CLACSO.
- Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). www.onpe.gob.pe
- Ojo Público* (3 de septiembre 2021). Informe sobre el fraude electoral. <https://ojo-publico.com/politica/abogados-grandes-estudios-aportaron-la-estrategia-del-fraude>

- Quijano, Aníbal (2000). Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina. En Edgardo Lander (comp.). *La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales. Perspectivas Latinoamericanas*. Buenos Aires: CLACSO.
- Renique, José Luis (2018). *Incendiar la pradera. Un ensayo sobre la Revolución*. Lima: La Siniestra Ensayos.
- Zavaleta, René (1986). *Lo nacional popular en Bolivia*. Ciudad de México: Siglo XXI.

Siglas

AIDSESEP	Asociación Inter étnica de la Selva Peruana
CCP	Confederación Campesina del Perú
CNA	Confederación Nacional Agraria
CGTP	Central General de Trabajadores del Perú
CONFIEP	Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas
CONULP	Comité Nacional Unificado de Lucha del Perú
CUNARC	Central Única Nacional de Rondas Campesinas del Perú
FENATE	Federación Nacional de Trabajadores de la Educación del Perú
FENMUCARINAP	Federación Nacional de Mujeres Campesinas, Artesanas e Indígenas del Perú
FTCCP	Federación de Trabajadores de Construcción Civil del Perú

FREDEPA	Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho
FREDIPA	Frente de Defensa de los Intereses y Desarrollo del Pueblo de Andahuaylas
INEI	Instituto Nacional de Estadística e Informática
MIDAGRI	Ministerio de Agricultura
MINEDU	Ministerio de Educación
PCM	Presidencia del Consejo de ministros
SINAMOS	Sistema Nacional de Apoyo a la Movilización Social
SUTEP	Sindicato Unitario de Trabajadores de la Educación del Perú
UNI	Universidad Nacional de Ingeniería
UNMSM	Universidad Nacional Mayor de San Marcos
VRAE	Valle del Río Apurímac Ene

Sobre la autora

Anahí Durand Guevara es socióloga. Doctora en Ciencias Políticas y Sociales por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Docente investigadora de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de Lima. Se ha desempeñado como investigadora en diferentes proyectos académicos publicando libros y artículos en temas de movimientos sociales, representación política, participación de las mujeres y pueblos indígenas. Durante el gobierno de Pedro Castillo se desempeñó como ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y asesora de la Presidencia del Consejo de ministros (2022). Entre sus últimas publicaciones, destacan *La irrupción cocalera, movilización social y representación política en los productores de hoja de coca del Perú*, Fondo Editorial Universidad Nacional Mayor de San Marcos (Lima, 2018) y “¿Cerrando un ciclo? Crisis del estado neoliberal, pandemia y sociedad en Perú” en *Estados alterados; reconfiguraciones*

estatales, luchas políticas y crisis orgánica en tiempos de pandemia. Bautista, Durand y Ouviña editores. CLACSO (Buenos Aires, 2021)

Este libro analiza la dinámica de movilización iniciada en Perú el 7 de diciembre de 2022, día de la destitución del presidente Pedro Castillo, abordando el proceso de politización de los sujetos movilizados, el colectivo que se construye y sus principales demandas. Este volumen, escrito sobre la marcha de una crisis todavía abierta, describe el marco histórico pero también las contingencias actuales, el estallido social y los recursos que los colectivos movilizados se agenciaron como protagonistas de un Perú plebeyo dispuesto a ejercer un protagonismo político, desafiando incluso cruentas represiones.

ISBN 978-987-813-608-0



 **CLACSO**